Respecto al uso de las categorías "extensivo" e "intensivo" en los clásicos del marxismo, tenemos a Lenin (*El desarrollo del capitalismo en Rusia* y *A próposito del problema de los mercados* ya citados). N. Bujarin, en *La economía mundial y el imperialismo*, ed Siglo XXI, Córdoba, 1972 (2a. ed.) se refiere al desarrollo de la economía mundial en "extensión" y en "profundidad", en el mismo sentido que aquí se utiliza. Diversos autores marxistas contemporáneos utilizan estos conceptos en sentido equivalente, como Alan Lipietz "¿Hacia una mundialización del fordismo?" en *Teoría y Política* n. 7/8, diciembre de 1982, ed. Juan Pablos y Universidad Autónoma de Guerrero y Michael Aglietta. *Regulación y crisis del capitalismo*, ed. Siglo XXI, México, 1979. En América Latina autores como A. Dabat utilizan estas categorías en el sentido explicado; véase por ejemplo, "La economía mundial y los países periféricos en la segunda mitad de la década del sesenta", en *Teoría y Política*, n. 1, abril-junio de 1980, México; además conjuntamente con L. Lorenzano, *Conflicto malvinense y crisis nacional*, libro de *Teoría y Política*, A.C., México, 1982.

El trabajo que sirve de base a la caracterización histórica que aquí se presenta es el que el autor conjuntamente con Pedro Gómez Sánchez publicó en el número 2 de *Teoría y Política*: "México: acumulación de capital y crisis en la década del setenta", cit. Ver principalmente pp. 73-85.

II. El contexto internacional y la integración de México a la economía mundial en los años setenta

1. EL CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN

Uno de los factores que posibilitó el cambio de fase del capitalismo mexicano lo constituyó la nueva estructura que tendía a imponerse en la economía mundial, principalmente su extraordinaria internacionalización y la configuración de nuevos centros dinámicos en la periferia, sobre todo en América Latina, Medio Oriente y Asia Oriental, a partir de los años sesenta. Ello significó que países como México pasaran de una situación de débil integración, característica de los años cuarenta o cincuenta, a otra de amplio aprovechamiento de las oportunidades que ofrecía el desarrollo de la nueva división del trabajo, la plétora de capital dinero en el mercado internacional y el auge petrolero, incorporándose de este modo exitosamente a la onda expansiva internacional recién abierta.

Esa nueva tendencia integradora, que no tardaría en ponerse de manifiesto en las relaciones comerciales y financieras de México con el resto del mundo, modificó el curso histórico que había seguido el capitalismo mexicano en casi todo el siglo.

A partir de la ruptura del sistema porfirista, el país había tendido hacia una economía menos abierta e integrada al exterior, situación que en general mantuvo su vigencia hasta fines de los años cincuenta. Los efectos de descomposición de la economía mundial, asociados a la crisis de 1929-1932, no hicieron otra cosa sino reforzar esta tendencia.[1] Además, como vimos en el capítulo anterior, durante los años cuarenta y cincuenta la acumulación de capital en México había estado determinada primordialmente por la formación del mercado interior vía ampliación de la circulación mercantil (principalmente en el campo) y por la proletarización de la mano de obra campesina. Ambos procesos fueron reforzados por una estricta política de protección comercial que limitó el influjo directo de la concurrencia intercapitalista mundial sobre los precios y ganancias, acentuando así el giro "hacia adentro" de la economía nacional. Si bien el país recibió la influencia comercial[2] de la segunda guerra mundial y de la guerra de Corea, su influencia, sin embargo, se inscribía en un marco económico gobernado por los determinantes de la fase "extensiva" de la acumulación de capital.

Hacia fines de la década del cincuenta, la economía mexicana empezó a chocar abiertamente con el fenómeno del "estrangulamiento externo", o sea con un conjunto de restricciones derivadas de la insuficiencia de divisas requeridas de manera impostergable para importar los medios de pro-

ducción propios de la fase de industrialización que estaba por abrirse. Todo ello determinó que las condiciones de relativo aislamiento económico empezaran a romperse. Esa ruptura era el efecto combinado de la maduración de sus estructuras internas y de la internacionalización del capitalismo mundial.

El fenómeno de la mayor integración daba respuesta a los siguientes procesos:

1] Al requerimiento de un flujo creciente de medios de producción de alta tecnología procedentes del exterior, para hacer frente al aumento de la composición orgánica del capital y a la difusión de los sistemas de la gran industria.

2] A las demandas de capital de préstamo resultantes de los requerimientos de medios de producción para la industria, los servicios y el agro.

Sin esos elementos, la nueva fase de la acumulación de capital en México se hubiera retrasado considerablemente. Así, por ejemplo, fue posible un importante aumento de la capacidad para importar gracias precisamente a la política del "desarrollo estabilizador", cuyos efectos de mayor integración al mercado financiero mundial hemos discutido en el capítulo I.

La integración no operó en una sola dirección, evidentemente. Al contrario, respondiendo a la constitución de un poderoso sector monopólico de tipo financiero e industrial, México empezó a convertirse en un exportador de productos industriales y de capitales. Obviamente el fenómeno era a principios de la década del setenta muy modesto y expresaba, ante todo la atracción del sistema financiero norteamericano y una naciente integración con las economías de Centroamérica. En todo caso, era ya lo suficientemente fuerte como para expresar la conversión de México, al igual que el caso de Argentina o Brasil, en "subcentro industrial altamente dinámico", condición que sintetizaba sus transformaciones estructurales, principalmente una elevada monopolización de la producción, la amplitud de la intervención estatal y, por lo tanto, la exportación de excedentes de capital al exterior. En una investigación anterior se intentó demostrar el grado de avance de las exportaciones de capital a lo largo de los años subsiguientes (aun antes de la crisis de 1982-1983, años en los que las mismas fueron muy cuantiosas), proceso que ubicó al país en posición de potencia "subimperialista" en la concurrencia mundial.[3] Ello significaba específicamente que México había empezado a establecer su propia zona de influencia económica (en América Central y en menor medida en el Caribe) mediante la relación típica entre un país industrializado y un país agrario. Además de exportar capitales hacia éstos, canaliza excedentes de su producción industrial y les compra materias primas y productos de bajo grado de elaboración. El establecimiento de esta zona de influencia era el producto de tendencias cíclicas y estructurales del capitalismo mexicano; por un lado, de la baja de la tasa de ganancia que impulsaba la búsqueda de oportunidades más rentables en el exterior y, por otro lado, de la aparición de signos de estancamiento dentro de su propio mercado interno, lo que obligaba también a buscar salidas en el exterior.[4] Situaciones como esta última se presentaban a principios de la década del setenta, en muy contados casos, pero era una tendencia que avanzaba, según los datos de que se dispone.[5] A la par de esas transformaciones México seguía siendo evidentemente un país dependiente, principalmente del capitalismo norteamericano.

Por último, cabe hacer referencia a la posición adquirida por México en el cuadro mundial de parcelación y redistribución del proceso productivo que dio origen a las llamadas "plantas maquiladoras". La posición de México cobró fuerza a fines de la década del sesenta y en los diez años siguientes se convirtió en el rubro más dinámico de la cuenta de ingresos de la balanza en cuenta corriente, arrojando un ingreso anual promedio de 480 millones de dólares en el periodo 1977-1979.

Por medio de los procesos descritos, el capitalismo mexicano empezó a recibir de manera más amplia y directa el influjo del ciclo mundial de valorización del capital, tanto en el sentido de fuerza aceleradora como de las contradicciones que se desplegaron durante la década del setenta. Esto obliga a estudiar con mucha atención el contexto internacional y a considerar permanentemente al capitalismo mexicano como parte del todo más amplio de la economía mundial. En los apartados que siguen intentaremos examinar las tendencias fundamentales de la expansión del capitalismo mundial en la década del setenta: la sobrexpansión del crédito y la ampliación del gasto público.

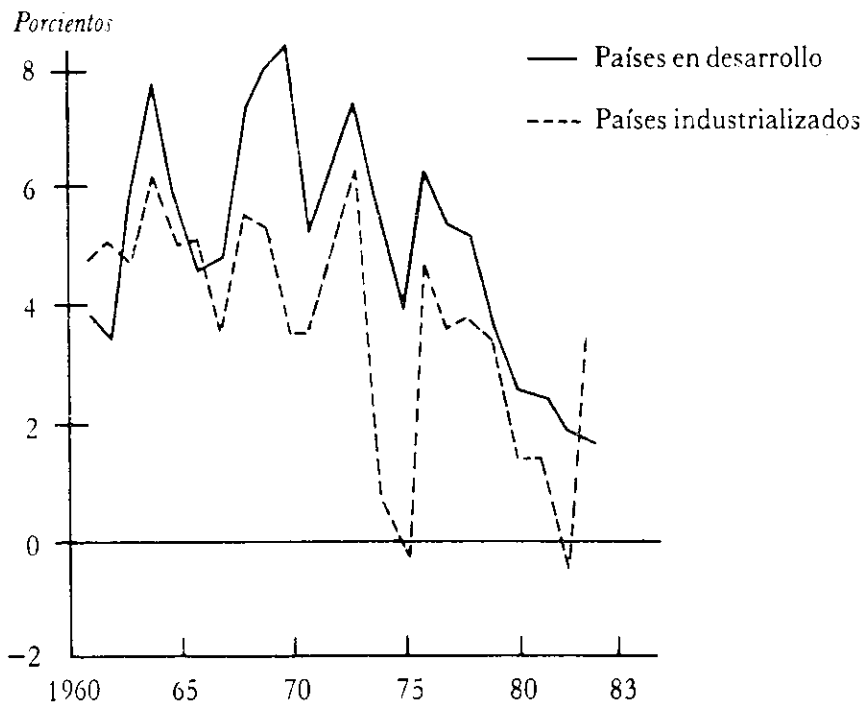
2. LA DÉCADA DE LOS SETENTA COMO UN PERIODO DE CONTRADICCIONES ESTRUCTURALES DEL CAPITALISMO MUNDIAL

A nivel de las tendencias del crecimiento económico internacional, la década de los setenta representa, a diferencia del decenio anterior, un lapso de crecimiento más lento; en él se manifiestan y actúan las contradicciones que habían madurado al amparo del prolongado auge de la posguerra.[6] En la gráfica 2.1, que muestra las tasas de crecimiento del PIB en los países industrializados y en desarrollo durante el periodo 1961-1983, se observa en primer término una baja general del ritmo de crecimiento, especialmente en los países más desarrollados y, en segundo lugar, una baja general más pronunciada de todos los países en la segunda mitad de la década del setenta.

Entre los factores de inestabilidad económica se encuentra la crisis de 1973-1975, la más severa desde los años treinta.[7] Su efecto general puede ubicarse en dos niveles: por una parte cortó el largo ciclo de prosperidad de la posguerra, durante la cual el mundo capitalista había conocido crisis relativamente moderadas y poco sincronizadas entre los distintos países; por otra parte, con ella se inició un periodo de crecimiento inestable y menos elevado, que se tradujo en marcadas fluctuaciones de la tasa de acumulación de capital, un importante desempleo y, sobre todo, una noto-

Gráfica 2.1

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y EN DESARROLLO, 1961-1983



FUENTE: World Bank, *World Development Report 1984*, Washington, D.C., p. 12.

ria intensificación de las presiones inflacionarias, todo lo cual llevó al capitalismo mundial a otra crisis coyuntural de gravedad equivalente, en 1980-1982. Por estas consideraciones, el capitalismo mundial pareció entrar en un periodo de descomposición que en muchos aspectos recordaba los decenios de entre guerras, cuando la expansión de los países capitalistas tendía a chocar prematuramente con la sobreproducción, la fragmentación del mercado mundial y el derrumbe del crédito.[8]

Detrás de estas crisis y de la situación general de inestabilidad económica, había factores estructurales diversos que conformaban un cuadro muy complejo. Ante todo, la incidencia de un fenómeno de sobreproducción mundial, originado en el hecho de que las industrias que sostuvieron el largo auge (automotriz, petroquímica, siderurgia...) habían llegado a generar un aumento considerable de la producción y de la concurrencia mundial, con efectos obvios sobre la rentabilidad del capital, en tanto que el crecimiento de la productividad pasaba a una fase descendente, que impedía sostener la tasa de plusvalía; como resultado de ello, la caída de la tasa de ganancia adquirió la configuración de proceso mundial. Evidentemente, a medida que la acumulación de capital se convertía en sobreacumulación y afectaba considerablemente las actividades industriales tradicionales, hacían su aparición y se desarrollaban otras industrias que absorbían cantidades considerables de capital mundial (informática, microelectrónica, biogenética, entre otras). Sin embargo, éstas no eran capaces aún de crear un efecto generalizado de expansión sobre la economía mundial, por encontrarse en una etapa temprana de su desarrollo y verse afectadas por la reacción sobreprotectora del conjunto de los países, así como por el ambiente especulativo generalizado, los cuales provocaban inflación crónica e inestabilidad cambiaria.[9]

El proceso de sobreproducción mundial que condujo a la crisis de 1973-1975 se amplió en la medida en que coincidía con un descenso de la capa-

Cuadro 2.1

AHORRO NETO Y AHORRO POR SECTOR EN LOS PAÍSES INDUSTRIALES, 1964-1981

(Como porcientos del PIB)

		AHORRO		
Año	*neto*	*de las corporaciones*	*gubernamental*	*familiar*
1964	10.8	3.4	2.0	5.4
1971	12.0	2.6	1.9	6.7
1972				
1973	14.1	2.7	2.8	8.7
1974	11.9	0.7	2.1	9.2
1975	9.0	0.8	—1.3	9.6
1976	9.6	1.4	—0.3	8.5
1977	10.4	1.9	0.4	8.2
1978	11.4	2.4	0.4	8.6
1979	10.9	2.1	0.9	8.0
1980	9.5	1.2	0.3	8.0
1981	8.8	0.6	—0.2	8.2

NOTA: Datos de los siete países más industrializados de la OCDE: Canadá, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos.
FUENTE: Hakin y Wallich, 1984.
Tomado de World Bank, op. cit., p. 22.

cidad de ahorro en los países capitalistas (lo que equivale a una reducción de la porción acumulable de la plusvalía producida); problema cuyas manifestaciones se hallan profusamente documentadas en estudios de la tecnocracia mundial, del FMI o del Banco Mundial, que ponen de manifiesto, además de la pérdida de dinamismo de la productividad del trabajo y de la tasa de ganancia,[10] una menor tasa de ahorro en la gran mayoría de los países imperialistas. A este respecto el Cuadro 2.1 permite apreciar el descenso del ahorro neto como porciento del PIB en los siete países más industrializados, que transita de un máximo de 13% en 1971-1973 al 10% en 1979-1980. El Cuadro 2.2, por su parte ilustra el deterioro de la tasa de ganancia del capital de las corporaciones en el periodo 1974-1976 en los mismos países (excepto Canadá), descenso que se mostró especialmente pronunciado en Japón, Inglaterra y Estados Unidos.

Cuadro 2.2

TASA DE GANANCIA DEL CAPITAL DE LAS CORPORACIONES EN VARIOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, 1962-1976

(Porcientos)

	EE.UU.	*Francia*	*RFA*	*Italia*	*Japón*	*Inglaterra*
1962-64	12.0	9.7	19.3	10.4	23.2	11.9
1965-69	12.2	10.0	19.5	11.4	27.9	19.6
1970-73	8.6	11.6	15.0	10.3	21.9	8.3
1974-76	7.1	8.0	11.4	—	13.5	5.7

FUENTE: Sachs, 1979. Tomado de World Bank, op. cit., p. 17.

3. EL PAPEL DEL ESTADO Y LA SIGNIFICACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL

Con la segunda posguerra se desarrollaron nuevos criterios e instrumentos para orientar la intervención del Estado a favor de la acumulación de capital. Esta reorientación se fundamentó en el keynesianismo, bajo la llamada "síntesis neoclásica", de la cual surgió la moderna política de gasto público deficitario y los criterios de estabilización del ciclo económico que habría de convertirse, a partir de los años sesenta, en una norma plenamente aceptada por todos los países capitalistas.[11]

La concepción keynesiana tenía su fundamento en una determinada visión del carácter y las contradicciones del capitalismo. Apuntaba principalmente que en las condiciones del capitalismo industrial maduro, las "oportunidades de inversión" venían decayendo, y en consecuencia se había producido un serio desequilibrio entre lo que ellos llamaban "el ahorro" y la "inversión". Para los keynesianos la contradicción fundamental del capitalismo tenía que ver, en consecuencia, con la desproporción de los grandes fondos de acumulación de capital respecto a las oportunidades de colocación rentable de esos recursos. En consecuencia, afirmaban, se había producido un aumento sostenido de la capacidad productiva no utilizada, misma que reforzaba el descenso de la rentabilidad capitalista. Para atacar esta contradicción el keynesianismo señalaba la necesidad de un aumento en la *demanda efectiva*, con el consabido resultado de un aumento de la capacidad social de compra y realización, que a su vez promovía un aumento de la capacidad productiva y de los fondos de acumulación.

El medio fundamental propuesto por los keynesianos para aumentar la demanda efectiva era el gasto público deficitario, entendido no como una simple transferencia de capital de un sector hacia otro, sino como una adición neta de recursos que sería capaz de crear un efecto multiplicador conducente a un aumento de la producción social. Huelga decir que tal visión de las contradicciones del capitalismo y de las vías para superarlas se hallaba profundamente influida por las condiciones históricas bajo las cuales se había desencadenado y desenvuelto la crisis mundial de 1929-1932.

En aquellos años, a consecuencia de la sobrexpansión del crédito y de la especulación, la sobreproducción de capital llegó al punto de romper la cadena de la circulación capitalista, de tal manera que coexistían sin conexión una inmensa acumulación de mercancías y fábricas paralizadas con una demanda sin satisfacer, tanto de índole personal como productiva. La superación de dicha crisis exigía, en países como Estados Unidos, la reconstitución de la cadena de la circulación capitalista, para que volviese a ponerse en marcha el proceso de reproducción social. De allí surgió, por ejemplo, la concepción de que si era preciso el Estado debería contratar obreros para que cavaran hoyos y después los cerrasen, pues sus salarios actuarían como un vehículo idóneo para elevar la demanda efectiva y reforzar la circulación mercantil, hasta restablecer, paulatinamente, los niveles "normales" de la actividad económica y de utilización del capital acumulado.[12]

El ámbito de la *circulación* capitalista se constituía, para los keynesianos, y posteriormente para el resto de las escuelas del pensamiento económico burgués, en el aspecto fundamental del sistema capitalista y en la vía para atacar sus contradicciones. Sobre la base del control de la demanda, y del gasto deficitario en particular, se constituyó la política de "estabilización y alargamiento del ciclo económico". La idea radicaba en impulsar y fortalecer la demanda en la parte baja del ciclo, para que se generaran niveles crecientes de utilización de la capacidad instalada. En contraste, una vez alcanzada la situación de pleno empleo y utilización máxima de la capacidad instalada, se aflojaría la tensión del gasto y se contraería la demanda, para evitar tanto un "sobrecalentamiento" del aparato productivo como el que la presión inflacionaria nulificara el nuevo poder de compra.[13]

Todo lo anterior reforzaba notablemente la tendencia hacia una mayor participación del Estado en el proceso social de reproducción en la generalidad de los países capitalistas. Naturalmente el keynesianismo no era ni con mucho la única fuerza propulsora del capitalismo de Estado. Al contrario, por lo que respecta a los últimos cuarenta años, se puede decir que fueron las condiciones generales de la expansión del capitalismo las que forzaron a un mayor estatismo, dado por ejemplo el gran peso de la investigación y el desarrollo tecnológico y de los costos fijos de reproducción del capital. En este sentido, el keynesianismo significó un fortalecimiento de determinadas tendencias que añadieron una faceta que pretendía regular y controlar el sistema capitalista, aspecto muy importante para explicar específicamente el gran aumento del gasto público deficitario.

Bajo estas condiciones las erogaciones públicas se elevaron efectivamente en todos los países capitalistas. En los más industrializados pasaron del 29% como proporción del PIB en 1961 a 41% en 1978[14] Obviamente, gran parte del gasto se financió sobre la base del endeudamiento. Para probar lo anterior son elocuentemente indicativos los datos de la gráfica 2.2 que ilustra, a lo largo de los años setenta, la amplitud y la tendencia del déficit fiscal en cuatro de los países imperialistas más representativos.

A su vez, la práctica del gasto público deficitario fue uno de los factores que alentaron un nuevo desarrollo del crédito internacional, ya que planteaban grandes demandas de capital de préstamo. Estos requerimientos fueron satisfechos en gran parte por el naciente mercado del eurodólar.[15] Este mercado, constituido por una creciente red de bancos que operan con dólares situados fuera de los Estados Unidos, aportó medios que difícilmente habrían emanado de otras fuentes, llevando el costo del financiamiento a menores niveles gracias a la aplicación de técnicas electrónicas de procesamiento de datos y a las ventajas económicas derivadas de la especialización y la operación en gran escala.

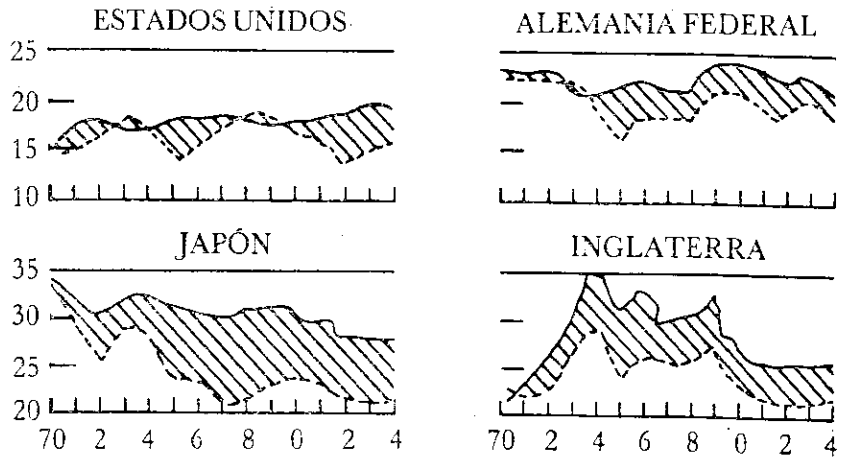
La gran disponibilidad de crédito permitió además que los países capitalistas atrasados amortiguaran los efectos de la crisis mundial de 1973-1975. Esto fue muy claro en casos como los de México, Brasil, Corea del Sur, Turquía o Filipinas, que, al decir del Banco Mundial, siguieron una línea de crecimiento económico sustentado en políticas financieras y fiscales que implicaban elevado endeudamiento con bancos comerciales. Ello les permitió hacer frente, en forma temporal, a las tendencias de menor crecimiento y, sobre todo, a la creciente intervención económica a cargo del Estado.[16]

Para explicar el impacto de la política económica de base keynesiana debemos tomar en consideración el hecho de que actuaba en el marco de un conjunto de transformaciones estructurales de la economía mundial (la revolución técnico-productiva, la mayor difusión del fordismo, el nuevo orden internacional del FMI y del GATT) que constituían la base material para que el aumento de la demanda, resultante del crédito y del gasto público deficitario, no operara simplemente como un medio de activar la

Gráfica 2.2

DÉFICIT PRESUPUESTAL EN PAÍSES CAPITALISTAS INDUSTRIALIZADOS,[1] 1970-1983

(Como porcentaje del PIB, superficie sombreada)



Nota: [1] Se trata del déficit presupuestal en Estados Unidos y en Alemania Federal, como déficit del gobierno central; en el caso de Japón e Inglaterra es el déficit del sector público.

FUENTE: Banco de Pagos Internacionales, tomado de *Boletín del FMI*, 9 de julio de 1984, p. 197.

inflación, sino como un estímulo adicional al aumento de la producción. Al mismo tiempo, tampoco debemos olvidar que la economía mundial de la inmediata posguerra había heredado, por los efectos de la recesión de los años treinta, instalaciones con capacidad productiva sin utilizar (a lo que se sumaron las posteriores necesidades de reposición del capital fijo destruido); por su parte, el uso del crédito se había reducido a un mínimo en los años de la depresión. En estas condiciones, el aumento de la productividad en los años cincuenta y sesenta tuvo un efecto acelerador extraordinario, que la política económica buscó estimular y prolongar.

Sin embargo, el proceso no pudo dejar de rebasar determinados límites, tras los cuales quedaron de manifiesto las contradicciones de la política de base keynesiana. Por un lado, el impacto de la revolución técnico-productiva en las ramas fundamentales de la industria mundial se iba agotando a la par que el fenómeno de la sobreproducción debilitaba el ciclo capitalista en los años setenta, emergiendo a la superficie los límites de la expansión de la demanda, lo que tomaba la forma de inoperabilidad

de la política económica.

Ante la caída de la tasa de ganancia (véase Cuadro 2.2), el aumento de la demanda se convirtió más bien en un estímulo para la inflación y la especulación.[17] En este sentido la sobreutilización del crédito y la inflación crónica de los años setenta no eran, esencialmente, más que un síntoma de la pérdida de funcionalidad de las políticas de base keynesiana.[18]

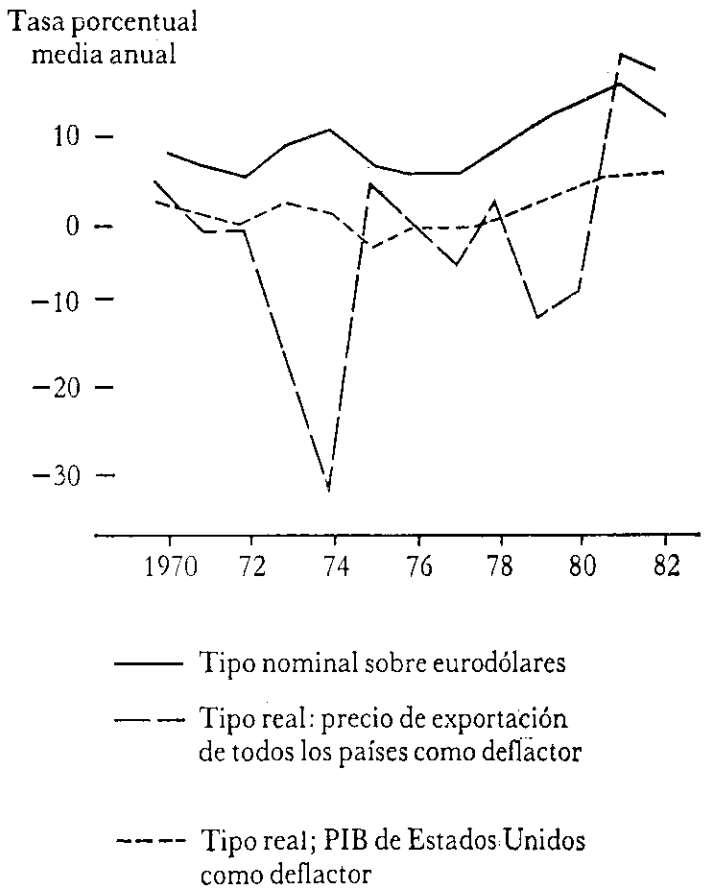
En otras palabras, se trata de las consecuencias del alargamiento artificial del ciclo de crecimiento económico, es decir, del intento de sostener, por medio de la adición de poder de compra y del crédito, el proceso de acumulación y valorización del capital. Por eso mismo, el efecto no podía ser otro que la "estagflación" (inflación en condiciones recesivas), fenómeno que no tardó en cuestionar la validez del pensamiento económico contemporáneo en general y del keynesianismo en particular, poniendo al orden del día una crisis teórica de proporciones sólo equivalentes a la de los años treinta.

Detrás de ese proceso de expansión del crédito en el que se basaban las políticas de corte keynesiano, se ocultaban otras contradicciones. Particularmente la disminución de la tasa de ahorro, a la que hemos hecho referencia en el Cuadro 2.1. No hay duda que el llamado reciclaje de los fondos petroleros disfrazó esta contradicción y permitió una expansión del crédito aún más peligrosa. La abundancia temporal de liquidez internacional asociada al reciclaje contribuyó a que las tasas reales de interés llegaran a ser incluso negativas, alentando de paso un mayor endeudamiento mundial. En la Gráfica 2.3. puede verse el descenso de la tasa de interés real para depósito en eurodólares a mediados de los setenta; obsérvese que el mayor descenso tuvo lugar efectivamente entre 1973 y 1976.

De hecho la situación a la larga era insostenible, ya que el menor crecimiento económico minaba drásticamente el poder de pago de las empresas o los gobiernos del mundo; al mismo tiempo la inflación y la plétora de capitales, provocada por el reciclaje de los fondos petroleros, presionaban en el sentido de un descenso de los ingresos reales del capital financiero internacional. Por lo tanto, sólo era cuestión de tiempo para que los líderes de los países capitalistas buscaran un freno a este proceso con correctivos drásticos, a fin de evitar que la insolvencia declarada de algún país o empresa provocara el pánico financiero y una cadena de sucesivas declaraciones de incapacidad de pago o bancarrotas y quiebras a escala mundial. Todo esto se produjo de hecho entre 1979 y 1982. Ante las crecientes dificultades para sostener la recuperación iniciada en 1976 y los peligros potenciales que ésta traía aparejados, el gobierno de los Estados Unidos se decidió por una política monetaria fuertemente restrictiva cuyo resultado fue un incremento de las tasas de interés jamás conocido en la historia del capitalismo.[19] Esta situación fue acentuada y prolongada por la política del gobierno Reagan, que implicó, durante varios años, un estricto control de la emisión monetaria. La Gráfica 2.3 muestra cómo se inicia, en 1978, el repunte de las tasas de interés, a tal grado que los márgenes reales

Gráfica 2.3

TIPOS DE INTERÉS REALES Y NOMINALES, 1970-1982



Nota: Se refiere al tipo de interés sobre eurodólares, cotización diaria media para depósitos a tres meses.

FUENTE: Tomado de Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 1983*, p. 11.

volvieron a ser positivos. Este incremento constituye uno de los factores fundamentales a la hora de explicar la irrupción de la crisis mundial de 1980-1982, ya que cortó abruptamente la tendencia de crédito barato prevaleciente durante la mayor parte de la década del setenta.

La restricción del crédito deterioró, por esa misma razón, el precario equilibrio financiero de todos los deudores del mundo. A partir de enton-

ces estaba planteada la irrupción de una crisis financiera, que sólo requería la caída de un gran deudor para detonar. Ese papel estuvo a punto de ser desempeñado por México en agosto de 1982, al anunciar que no estaba en condiciones de seguir cumpliendo con las amortizaciones de su deuda externa. Pese a que no se produjo un colapso del sistema financiero, los bancos iniciaron un periodo de restricciones en lo que concierne al otorgamiento de nuevos préstamos.

En el apartado siguiente intentaremos esbozar una caracterización de conjunto sobre las condiciones de la economía mundial a fines de la década del setenta, apoyándonos en los elementos ya aportados, con el fin principalmente de establecer las implicaciones para México.

4. LA SITUACIÓN GENERAL A FINES DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA. IMPLICACIONES PARA MÉXICO

En respuesta al clima de restricciones al uso del crédito con fines de alargamiento del ciclo económico, la generalidad de los países inició o profundizó sus procesos tendientes a racionalizar las políticas de intervención estatal. Se pretendía, sobre todo, sanear las finanzas públicas y controlar la inflación. Semejante proceso constituye en sustancia lo que hemos llamado "reorganización del capital mundial". Evidentemente no todos los países han puesto en práctica estas acciones al mismo tiempo y con similar intensidad. México proporciona a este respecto el ejemplo de un país que si bien a la larga se subordinó al proceso mundial de restricción fiscal, lo hizo después de llevar casi hasta sus últimas consecuencias las posibilidades del expansionismo inflacionario de corte keynesiano.

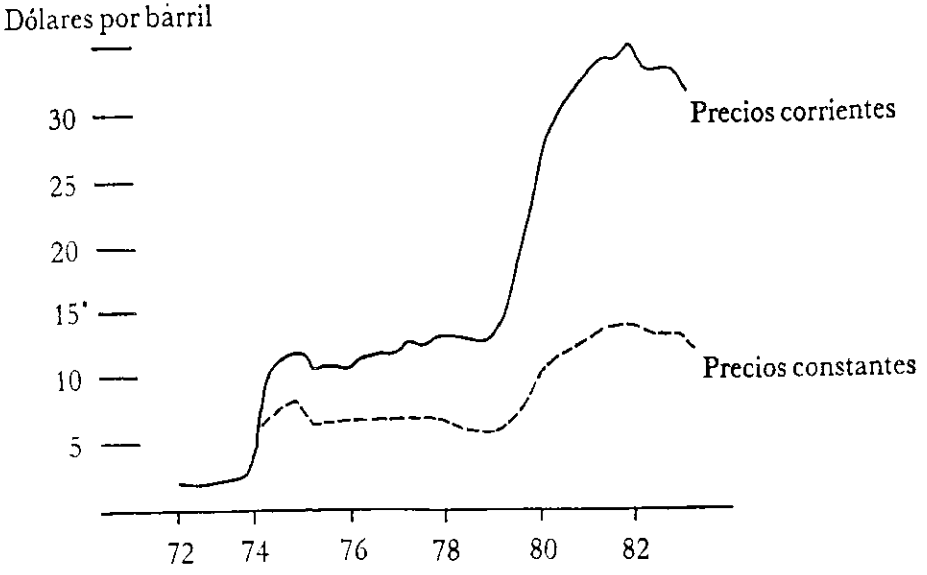
Cabe recordar que desde la década del sesenta México se había convertido en gran importador de capitales, proceso que permitió superar en gran parte las dificultades iniciales que planteaba la transición a la fase "intensiva" de la acumulación de capital. Entrada la década del setenta, el proceso de endeudamiento se intensificó aún más dado el giro de la política del Estado mexicano hacia el keynesianismo y en general hacia un mayor grado de participación y control estatal del proceso social de reproducción. Las restricciones iniciales del crédito de fines de la década del setenta no afectaron prácticamente el creciente proceso de endeudamiento público, gracias a que el "segundo shock petrolero mundial" (véase Gráfica 2.4), elevó sus ingresos de petrodólares y se constituyó en un gran aval para mayores empréstitos.

La conversión de México en potencia petrolera mundial determinó la apertura de condiciones coyunturales distintas de integración al mercado mundial que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1] Generó una transferencia enorme de riqueza a favor del país, que debe entenderse como parte del proceso más amplio de transferencia a favor del conjunto de los países petroleros que tuvo lugar durante la dé-

Gráfica 2.4

PRECIOS POR BARRIL DE PETRÓLEO
1972-1983



FUENTE: Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 1983*, Washington, D.C., p. 10.

cada mencionada. El vehículo de esa transferencia fue la renta petrolera, que llegó en México al equivalente a 22-30 dólares por barril.[20]

Con el apoyo de esos extraordinarios ingresos el país llegó a figurar, entre 1978-1980, a la cabeza de la lista de los deudores más confiables para préstamos bancarios. De esta manera, su endeudamiento adquirió una lógica propia que no se habría de detener más que con la interposición en su camino de algún hecho catastrófico.

2] El gran despliegue de las exportaciones petroleras desequilibró el resto de las exportaciones mexicanas y tendió a chocar con el desarrollo de sus exportaciones industriales. Esto se explica principalmente porque las ventas de petróleo se apoyan en factores ligados a la dotación natural de recursos no reproducibles y carecen de las posibilidades técnico-productivas que permiten sustituir una gama de productos por otra para lograr adaptación a las condiciones cambiantes del mercado mundial. Los grandes países exportadores de petróleo generan además un conjunto de presiones sobre su tipo de cambio, que casi invariablemente los lleva a perder competitividad internacional para sus exportaciones no petroleras.

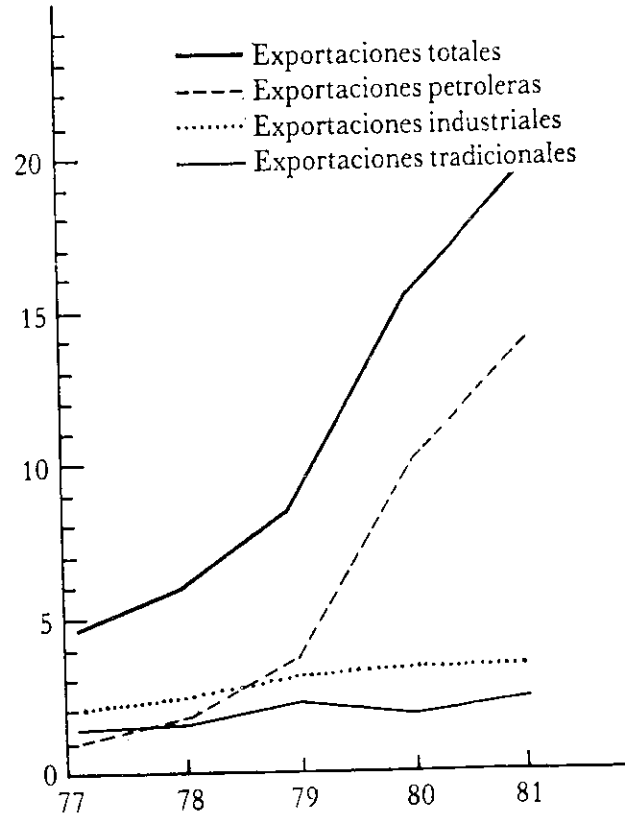
La entrada masiva de petrodólares a un país suele causar un efecto conocido en general con el nombre de "petrolización", que será tanto más intenso en la medida que la estructura productiva esté menos desarrollada. La petrolización se traduce en un conjunto de repercusiones sobre el proceso de valorización del capital que analizaremos en el capítulo IV. También tiene implicaciones sobre el poder de compra internacional de la moneda de un país, factor indispensable para entender las condiciones de competitividad de las exportaciones no petroleras de México. Esta cuestión se podría explicar brevemente de la siguiente manera: la entrada masiva de petrodólares implica un extraordinario elevamiento del caudal de la circulación capitalista en el país receptor, que traerá aparejado un aumento de la inflación y coyunturalmente del poder de compra externo de la moneda nacional. Ante el fuerte aumento de las reservas internacionales del país, la cotización internacional del peso (o de la moneda local) se ve inflada, en tanto que el incremento interno de precios socava, en el fondo, su poder de compra real. Ello provoca una disparidad entre lo que una moneda puede comprar externamente y su poder de compra interno. Este efecto, que la generalidad de los observadores califica como "sobrevaluación monetaria", se traslada a las exportaciones no petroleras, que se ven de este modo encarecidas, en tanto que las importaciones se abaratan. Esta situación fue muy clara en el comercio exterior de México a partir de 1979. Hasta ese año las exportaciones industriales medidas en dólares corrientes habían venido creciendo a una tasa de 12% (entre 1975-1979). Sin embargo, después, por efecto de la sobrevaluación del peso, aquéllas empezaron a perder mercado y entre 1979 y principios de 1982 se hallaban en una situación de relativo estancamiento. Ello puede observarse fácilmente en la Gráfica 2.5, que representa el comportamiento de los tres grupos principales de productos exportables. En el caso de los industriales se aprecia una gradual pérdida de su ritmo de crecimiento que se expresó primero en el aplanamiento de la curva respectiva, a partir de 1979, y después en su leve pendiente descendente, en 1981. Esta pérdida de dinamismo se tradujo, por las causas ya indicadas y pese a que en el periodo se hicieron importantes esfuerzos por desarrollar algunos ítems como la exportación de autopartes, en un estancamiento de todo el comercio exterior no-petrolero, ya que la exportación de productos tradicionales (productos agrícolas principalmente) decayó también (véase gráfica). El índice del volumen de las exportaciones de algodón, café y camarón, que había alcanzado su máximo en 1978-1979, declinó al año siguiente.[21]

Como se ve, las condiciones específicas de integración de México en el mercado mundial están signadas por la presencia de lo contradictorio. Por una parte, la sobrexpansión del crédito bancario y el auge petrolero le permitieron disfrutar, por un breve periodo, de una cuantiosa transferencia de riqueza. Por otra parte, el choque del auge mexicano con las fuertes tendencias recesivas mundiales, así como las propias contradicciones del

Gráfica 2.5

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1977-1984

(Miles de millones de dólares corrientes)



FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, *Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos*, varios años.

auge interno (la petrolización y la sobrevaluación del tipo de cambio) desencadenaron una fuga de capitales que reubicó fuera del país gran parte de la riqueza recibida previamente desde el exterior. A partir de la crisis de 1982 se percibe nítidamente la irrupción de otros fenómenos que establecerán condiciones cualitativamente diferentes de integración a la economía mundial.

III. La irrupción de la crisis estatal, 1971-1976

1. EL SALDO DEL DETERIORO DE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO "ESTABILIZADOR" Y LA CRISIS ESTRUCTURAL

El arribo a la década de los setenta fue precedido por un amplio marco de contradicciones entre las cuales, según hemos visto, destaca el hecho de que las políticas de fomento al capital propias del llamado periodo "estabilizador" estaban, desde 1965-1966 aproximadamente, en una fase de evidente deterioro marcado por el incremento tanto del déficit fiscal como de los intercambios con el exterior. El deterioro de dicha estrategia cumple un papel clave para comprender los cambios de orientación de la política de intervención estatal, al inicio de la década del setenta, ya que el deterioro de la tasa de ganancia era ya un hecho al inicio de estos años pese a todos los avances logrados en el periodo del desarrollo estabilizador.

El fenómeno de la sobreacumulación de capital industrial se pone de manifiesto en el hecho de que luego del vigoroso ciclo de 1963-1967, el crecimiento de la inversión privada empezaba a desacelerarse, tal como se muestra en la Gráfica 3.1.

En el fondo, observamos que después de casi un decenio de desarrollo intensivo y de elevada participación de la inversión en el PIB, se gestaba una crisis estructural, que aún no alcanzaba toda su potencialidad. En ella incidían tanto contradicciones propias de la fase intensiva como factores ligados al retraso de la productividad agrícola (condicionado por el sistema minifundista ejidal). El papel de la política económica era de por sí muy complejo, pues de factor acelerador había concluido por generar nuevas contradicciones.

2. LA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SETENTA

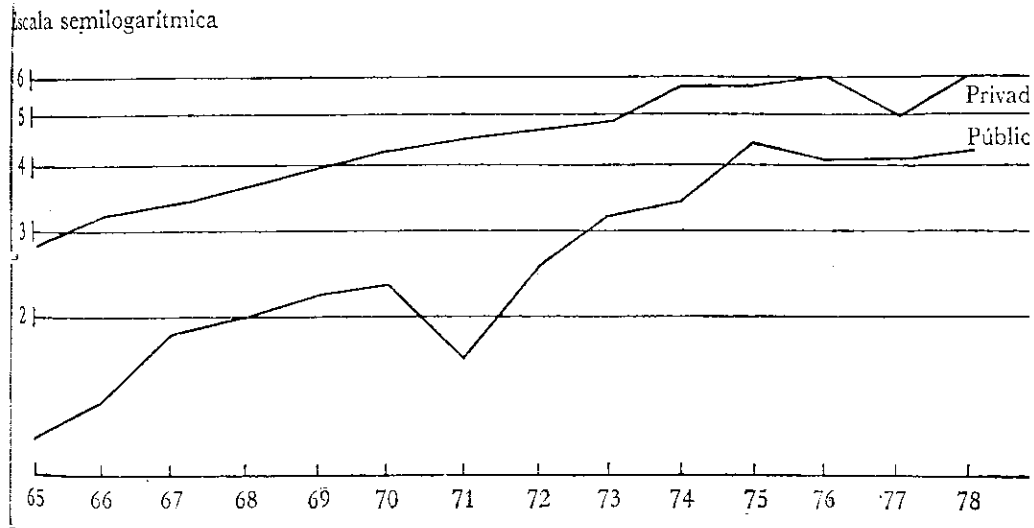
La magnitud de estas fuerzas prefiguradoras de la crisis, asentadas en la estructura y las tendencias históricas del capitalismo mexicano, planteaba como ineludible una respuesta estatal, cualquiera que fuera la dirección de ésta. No sólo estaba presente la amenaza del estancamiento económico (exacerbado coyunturalmente por la recesión norteamericana de 1971), sino también un malestar social difuso, que expresaba la inconformidad general de la clase media y la pérdida de esperanzas por parte de un campesinado que recurría a acciones extremas, tales como invasiones violentas de tierras, y que se distanciaba del paternalismo estatal, profundamente desilusionado del espejismo del reparto agrario. El peso del desempleo era también agobiante: la relación entre el incremento de la población total y el de la población económicamente activa entró en una fase distinta en los años setenta. De 1950 a 1970, la población activa había crecido más lentamente que la población total, pero de 1971 en adelante la situación tendió a revertirse, acrecentando la amenaza del desempleo, ya que los contingentes de nuevos trabajadores que se incorporaban al mercado se acercaban al orden de los 600 a 700 mil anuales (véase Cuadro 3.1). La situación del mercado laboral incidía a su vez sobre la evolución de la productividad, dificultando objetivamente la reversión de las tendencias de estancamiento productivo que se mostraban asociadas al desarrollo desigual desde los años sesenta. Merced al crecimiento explosivo de la fuerza de trabajo —trabajadores jóvenes sin experiencia previa— las empresas, principalmente las más atrasadas, encontraban terreno fértil para sobrexplotar al trabajador, con las previsibles consecuencias de retraso en la inversión destinada a mejorar la productividad.[1]

En 1972, el Estado mexicano dio paso efectivamente a lo que constituiría una nueva estrategia de intervención estatal. Por este camino el Estado in-

Gráfica 3.1

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA REAL

(Millones de pesos de 1960)



FUENTE: Banco de México, *Informes anuales*, varios años.

Cuadro 3.1

POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO EN MÉXICO, 1950-1969

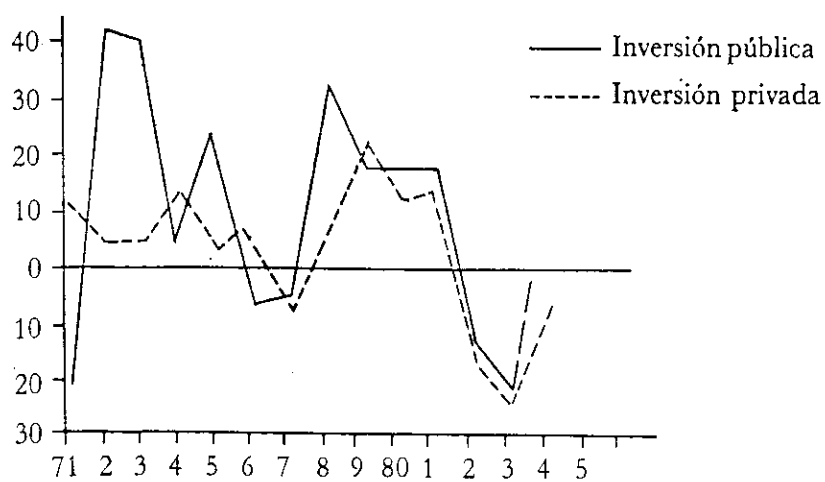
	1950	*1960*	*1969*	*tasa de crecimiento % anual*	
		miles de personas		*1960/1950*	*1970/1960*
Población total	26 463	36 003	48 715	3.1	3.4
Población de 12 años o más	17 307	22 680	29 713	2.7	3.2
Población económicamente activa	8 345	10 213	12 955	2.0	2.7

FUENTE: Tomado de World Bank, *Special Study of the Mexican Economy...*, cit., p. 26.

Gráfica 3.2

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

*(Porcientos)**



* (Inversión privada/inversión pública) 100

1965	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
2.39	2.24	1.81	1.81	1.7	1.81	2.65	1.93	1.53	1.67	1.31	1.46	1.2	1.12

FUENTE: Tomado de Bancomer, *Panorama Económico*, México, diciembre de 1983, p. 268.

crementó su participación no sólo en la generación de la inversión, sino también en el PIB, llegando por ejemplo a participar, hacia 1975-1976, con el 25% de los servicios financieros, casi la mitad de los servicios médicos y del transporte aéreo, la totalidad de los sistemas de correos y telégrafos, casi un 9% de la manufactura (véase Cuadro 3.2). Además, en contraste con la situación que predominaba a mediados de los años sesenta, cuando por cada peso invertido por el Estado los capitalistas privados invertían 2.06, hacia mediados de los setenta la misma proporción era de 1 a 1.27 (Gráfica 3.2). Esta estrategia de intervención creciente, que sobrepasó pronto los niveles característicos de los años sesenta, se basaba en un decidido uso del déficit fiscal, a la manera de la tradición keynesiana, y contribuyó a alimentar el ritmo del endeudamiento tanto interno como externo.[2]

El déficit fiscal creciente (Cuadro 3.3) y la mayor participación económica del Estado no constituían una simple extensión de la política económica del periodo "estabilizador", la cual había incursionado por los senderos del expansionismo a medida que entraba en contradicciones. Al contrario, lo que empezó denominándose "desarrollo compartido" representaba una concepción y una visión sobre el papel del Estado y del sistema económico que tendió a romper con los criterios más conservadores de la burocracia mexicana y concluyó por producir una división dentro de ésta (cuestión que examinaremos más adelante), con dos sectores cada vez más diferenciados. La nueva concepción y el nuevo bloque se sostenían en dos pilares: 1] La intervención acrecentada del Estado era capaz de crear un efecto de arrastre, que dotaría a la economía mexicana de condiciones de crecimiento y estabilidad y a largo plazo resolvería los problemas estructurales del desempleo y la concentración del ingreso; 2] a través de acciones tendientes a aumentar la participación de los salarios en el ingreso nacional, se lograrían las condiciones de mercado necesarias para estimular la capacidad productiva nacional, sacándola de su estancamiento.

Por lo demás, el desplazamiento de la estrategia hacia este horizonte no era un fenómeno propiciado únicamente por factores internos. De hecho, tal como hemos visto en el Capítulo II, las condiciones generales de la economía mundial apuntaban en esa dirección ya que la práctica del gasto público deficitario se estaba convirtiendo en una norma para alcanzar una extensión del ciclo económico (mayor duración de la prosperidad) y la generación de pleno empleo; además, la abundancia y baratura del crédito bancario hacía sumamente asequible esta estrategia.

En consonancia con la difusión del instrumento keynesiano y poskeynesiano, se observaba en México una gran difusión de estas ideas no sólo entre las filas jóvenes del PRI, sino también en diversos núcleos de la intelectualidad de izquierda. Como se destacó en el Capítulo I, probablemente una de las vertientes más importantes en el país de ésta compenetración con la visión keynesiana está representada por la de los autores de *México, hoy*. Otra muestra importante de la identificación de esta corriente

Cuadro 3.2

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN EL PIB DE ALGUNAS RAMAS SELECCIONADAS

(Porcientos)

	1970	*1971*	*1972*	*1973*	*1974*	*1975*	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*	*1981*	*1982*
Agricultura[a]	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Manufactura	7.7	8.0	8.2	8.2	8.4	8.[illegible]	8.6	9.0	9.3	9.7	9.7	10.0	10.2
Correos, teléfonos	21.2	17.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Comercio	2.3	2.2	2.6	2.8	4.2	4.[illegible]	4.3	4.6	5.3	4.1	3.8	4.0	4.0
Transporte aéreo	54.7	56.4	55.3	53.4	57.5	54.[illegible]	51.4	48.6	47.7	46.1	45.2	44.4	100.0
Servicios financieros	21.7	23.7	25.4	24.6	26.3	21.[illegible]	24.5	30.6	23.1	22.4	25.0	25.0	100.0
Educación	73.3	74.0	73.7	73.6	73.0	71.5	71.4	71.3	70.0	70.1	70.3	70.6	70.0
Servicios médicos	56.2	56.4	56.1	56.4	55.5	55.[illegible]	55.2	53.8	50.8	49.8	49.5	48.3	47.3

[a] Se refiere a una estimación del PIB ejidal, con base en datos censales para 1970. En sentido estricto, dicho PIB no es generado por el sector público.
FUENTE: Elaborado con datos del IV y VI Informes de Gobierno de José López Portillo, de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

con el keynesianismo (bajo influencia nacionalista) lo marca el libro *La política económica en México, 1971-1976*, escrito por Carlos Tello, a la sazón miembro del gabinete de Echeverría. En este documento se hace un planteamiento de la estrategia basada en una mayor participación del Estado para sustituir al capital privado en sectores estratégicos de la economía, y en el uso del gasto público como promotor del desarrollo. En este libro, como en muchos artículos en periódicos y revistas, los sustentadores de la corriente que hemos denominado, en el Capítulo I, del "patrón autolimitativo" abogan por una especie de capitalismo popular con amplia participación del Estado y permanente subvención a la pequeña producción campesina o industrial.[3]

A medida que la difusión de las tesis keynesianas y poskeynesianas adquirían un radio mayor y que el Estado mexicano tendía a incorporarlas en su práctica y en su filosofía, como partes de su intento más amplio de lograr un equilibrio frente al cuadro de contradicciones de la fase vigente, la polarización entre los dos sectores de la tecnoburocracia encontraba nuevos puntos de definición.

Los puntos fundamentales de la controversia recaían por el momento sobre la política de empleo y salarial de un lado y sobre el gasto expansionista de otro. Los argumentos básicos del sector más conservador de la tecnoburocracia (depositario de la tradición de eficiencia y equilibrio presupuestario de la escuela del desarrollo estabilizador) eran en términos generales los siguientes:[4] las políticas de empleo de corte reformista, que

Cuadro 3.3

DÉFICIT FISCAL TOTAL Y COMO PORCENTAJE DEL PIB

(Miles de millones de pesos)

	Nominal	*Real*[a]	*Porciento del PIB*
1968	— 5.03	— 5.46	1.48
1969	— 9.08	— 9.55	2.42
1970	— 6.08	— 6.08	1.36
1971	— 4.16	— 3.96	0.8
1972	—17.04	—15.50	3.0
1973	—27.48	—22.34	3.9
1974	—34.25	—22.38	3.8
1975	—53.62	—30.46	4.8
1976	—64.07	—31.40	4.6
1977	—61.13	—23.24	3.3

[a] Deflactado con el índice nacional de precios al consumidor.
FUENTE: FMI, *Estadísticas financieras internacionales, anuario 1982*, Washington, D.C., p. 274.

pretendían combatir la desocupación urbana, se mostraban como un factor agudizador del desempleo, pues inducían a que los trabajadores subempleados del campo lo abandonaran, para beneficiarse de las posibilidades de empleo remunerativo auspiciadas por el Estado. De esta manera el impacto ocupacional de esta política se veía neutralizado o ampliamente revertido por una corriente migratoria que tendría resultados económicos y sociales catastróficos. Respecto a la política salarial reformista, sostenían que si sobrepasaba las posibilidades permitidas por el nivel y ritmo de la productividad del trabajo, se produciría un proceso inflacionario que terminaría por reducir los salarios reales, estimulando a su vez la inversión especulativa en desmedro de la inversión productiva. Al reducirse el ahorro como consecuencia de la mayor inflación resultante del gasto público deficitario, podría disminuir la capacidad de financiamiento real del sistema bancario con consecuencias ulteriores aún más graves sobre la actividad productiva.

Estas tesis reflejaban los intereses económicos del gran capital y por ello apuntaban, en primer término, a elevar la eficiencia productiva (y la tasa de plusvalía), por cuanto su deterioro había entorpecido (o estaba por entorpecer) la acumulación de capital en la nueva fase y puesto en peligro la modernización económica de la cual el gran capital había sacado el mayor provecho desde los años sesenta, tal como hemos visto en el Capítulo I. Como se recordará, los principales lineamientos de política económica de este núcleo de la burocracia habían estado ya presentes en los esfuerzos de la primera reorganización económica de los años sesenta, entre cuyos frutos estuvo la ampliación del sistema financiero del país. Sin embargo, en la medida en que la problemática del cambio de fase de acumulación de capital condujo a nuevas contradicciones marcadas por la recaída de la tasa de ganancia y a un cuadro muy complejo de derivaciones sociales y políticas, el sector eficientista perdió la iniciativa y las propuestas de reformas económicas y concesiones sociales y políticas (y con ellas la gama de acciones generales de política económica) de los siguientes años provino de otro sector que nucleó todo un espectro dentro de la burocracia, en el que tuvieron destacada cabida "los jóvenes del PRI" y, desde el punto de vista de la orientación de la política económica, las ideas de la izquierda reformista cuyos fundamentos keynesianos hemos ya analizado.[5]

La línea reformista del régimen de Echeverría parecía a primera vista como una continuación de la tradición populista del Estado mexicano, pero en el fondo constituía un fenómeno relativamente nuevo en algunas de sus medidas de política económica, ya que las reformas y las concesiones económicas, que habían estado anteriormente subordinadas de manera total a las normas de rentabilidad capitalista, aparecían ocupando ahora un papel relativamente autónomo o pasaban a desempeñar un rol inductor del crecimiento económico, ya que bajo la visión keynesiana y poskeynesiana se aceptaba el postulado de que el crecimiento de la demanda era la mejor garantía, para fortalecer y rehabilitar la producción de acuerdo a una lógica ya explicada en el Capítulo I. La adopción de esta política estaba objetivamente favorecida por toda la problemática relacionada con el fin del periodo estabilizador, que por sus implicaciones exigía reformas de un tipo u otro.[6]

3. LAS IMPLICACIONES DE LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA: LA CRISIS ESTATAL A MEDIADOS DE LOS AÑOS SETENTA

Las implicaciones del cambio de política sobre el proceso de acumulación de capital puede subdividirse en cuatro categorías, plenamente interrelacionadas, pero cuyo tratamiento debe hacerse por separado. Primeramente hablaremos de las repercusiones de índole estructural y luego de las de índole coyuntural. En el centro de las primeras se encuentran las repercusiones causadas por la política salarial reformista, que al no subordinar el aumento de los salarios a los requerimientos de la rentabilidad capitalista provocó un mayor reflujo de la inversión privada[7] (además de una disminución del impacto directamente productivo del gasto público, al poner en conflicto los rubros de asistencia social con los de fomento capitalista).[8] Esperaban que el fortalecimiento del poder de compra, por vía del aumento de los salarios, alentara una mayor inversión: finalmente sucedió todo lo contrario: el aumento de los costos de reproducción del capital (tanto de origen salarial como no salarial) deprimió aún más la inversión privada, vulnerada ya por tendencias de largo plazo.

Por otra parte, al ampliar el gasto, déficit elevado y mayor promoción económica, la política del Estado produjo tensiones y contradicciones de variado carácter, que revirtieron sobre el proceso económico. En un primer plano destacan las de carácter financiero, que condujeron a lo que se ha dado en llamar "desintermediación financiera", con su secuela de captación bancaria decreciente (la proporción de los pasivos bancarios con respecto del PIB había decrecido de manera evidente para 1975-1976, véase Cuadro 1.6). A pesar de lo anterior y de la erosión de las finanzas públicas provocada por el crecimiento de las operaciones deficitarias de las empresas estatales, el Estado no tuvo más remedio, dadas sus apremiantes necesidades de crédito, que elevar la presión sobre el sistema bancario (vía reserva legal) y acelerar la emisión monetaria.[10] El efecto inflacionario de ambas acciones se traducía en una reducción de la tasa de interés real y tendía a desestimular el ahorro, lo que alimentaba tenazmente el círculo vicioso existente. Por todo ello se agudizó el conflicto entre el Estado y la banca por la apropiación del crédito; a los elevamientos del encaje legal la banca respondía con operaciones especulativas, que habrían de adquirir proporciones de pánico en 1976.[11]

El tercer orden de repercusiones atañe a las políticas de subsidio y a la orientación populista del Estado mexicano (particularmente la corrupción y los criterios de manipulación del gasto público). Tanto uno como otro

formaban parte de una tradición histórica; sin embargo, en este periodo se manifiesta de lleno su disfuncionalidad con respecto a los requerimientos de la acumulación de capital y arrojan luz sobre un deterioro de la capacidad de gestión económica del Estado que dista de ser coyuntural. Por ejemplo, los subsidios, que ocupaban ya un lugar importante en la

Cuadro 3.4

SUBSIDIOS ESTATALES EN LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA, 1977

(Miles de millones de pesos)

		Como porciento del:	
	Subsidio	*Déficit de la cuenta de capital del sector público*	*Ingreso interno bruto*
A. Energía	59.4	47.4	3.5
a.1) Pemex	52.9	42.2	3.1
a.2) CFE	6.5	5.2	0.4
B. Transporte	2.5	2.0	0.2
b.1) Ferrocarriles	2.5	2.0	0.2
C. Agricultura	31.4	25.1	1.9
c.1) irrigación en gran escala	6.0	4.8	0.4
c.2) irrigación en pequeña escala	1.5	1.2	0.1
c.3) precios de garantía (maíz y fertilizantes)	2.6	2.1	0.2
c.4) BANRURAL	12.0	9.6	0.7
c.5) fideicomisos	9.3	7.4	0.5
TOTAL	93.3	74.5	5.6

FUENTE: Tomado de World Bank, *Special Study of the Mexican Economy*, cit., p. 64.

reproducción del capital social, estaban adquiriendo más amplia cobertura como instrumento compensador del deterioro de la rentabilidad de las empresas. Prácticamente todas las actividades económicas fundamentales habían sido alcanzadas por el subsidio, desde la irrigación (en pequeña y gran escala) hasta el suministro de enérgeticos básicos a la industria (combustibles y energía eléctrica), pasando por una buena parte de los bienes que componen la canasta salarial básica (vía Conasupo), más una infinidad de fideicomisos de apoyo a la inversión privada (los cuales por sí solos otorgaban en su conjunto subsidios por 93 mil millones de pesos en 1977).[12] Por todo lo anterior, los subsidios directos a la acumulación de capital habían llegado a representar el 5.6% del ingreso nacional en 1977 (véase Cuadro 3.4).

Sin embargo, pese a la gran amplitud alcanzada por los subsidios, la sed no se apagaba, en virtud de que se había creado un círculo vicioso, pues disminuía la presión para erradicar sistemas de producción obsoletos e ineficientes. Al sostener dentro del mercado multitud de empresas que de otra forma habrían sido eliminadas por ineficientes, propendían a elevarse los costos sociales de producción. Finalmente, los estándares nacionales de competitividad real tendían a distanciarse de la contraparte internacional, retardando el proceso de integración comercial a la economía mundial (lo que se expresaba de inmediato en crecientes déficits comerciales y presión devaluatoria).

Históricamente la corrupción dentro de las esferas gubernamentales había sido un instrumento fortalecedor de la acumulación de capital y había marchado a la par con ésta. La corrupción brindaba la posibilidad de amasar enormes fortunas en un sexenio o menos, cuyo monto era difícil de igualar (en ese lapso) mediante otras formas de enriquecimiento privado. Estas fortunas, dada la rápida expansión económica del país, eran vertidas exitosamente hacia las más variadas actividades productivas, especialmente el turismo, los transportes, los bienes raíces, etcétera. En los años sesenta, sin embargo, se produjo una peligrosa transición; la corrupción siguió generando grandes fortunas que se transferían a las actividades más rentables, pero no todas las fugas de fondos públicos lograban ser retenidas por la red productiva de la acumulación de capital y, en cambio, empezaban a ser inocultables los efectos contraproducentes de la corrupción sobre las finanzas públicas. Los efectos perniciosos se explican principalmente porque la fase "intensiva" del desarrollo del capitalismo exigía estricta racionalidad del gasto público, lo que chocaba de manera abierta con los residuos populistas del Estado mexicano. Esta contradicción se exacerbó en la medida en que los esfuerzos reformistas del régimen determinaron la utilización del gasto público tanto como un expediente para intentar resolver simultáneamente problemas económicos, sociales y políticos, cuanto como un medio de cooptación o manipulación de figuras o movimientos de oposición al régimen. Por todo ello, el gasto público adquirió un ritmo no controlable, dentro de un aparato burocrático cada

vez más grande y complejo.

Finalmente, veamos el cuarto grupo de implicaciones de la política estatal relacionada con el ciclo económico. En 1972 se puso en marcha la estrategia de elevado gasto público, siendo el incremento correspondiente a ese año el más elevado desde los años veinte. Su fin era arrastrar a la inversión privada y crear un efecto expansivo, fundado sobre la lógica del efecto multiplicador del gasto público (pieza clave de la teoría keynesiana), paralelamente se esperaba prorrogar la duración del ciclo de crecimiento económico, bajo la expectativa de que un nivel de actividad económica creciente o sostenido generaría una corriente más elevada de ingreso fiscales (sobre todo porque la mayor parte de los impuestos son de tipo indirecto, y dependen por lo tanto del nivel de producción y ventas), que —se suponía— retroalimentaría el gasto público y su efecto multiplicador. La política tuvo inicialmente relativo éxito: en 1972 y 1973, el PIB creció a una tasa de 7.2 y 7.5%, respectivamente, insinuándose una reactivación de tipo general. Sin embargo, en 1974, la fuerte disminución del gasto público ocasionó una baja en la tasa de crecimiento del producto (a 5.9%), que si bien coincidió con una efímera recuperación de la inversión privada, marcó una tendencia irreversible hacia la crisis de 1976 (véase Cuadro 3.5). Efectivamente, pese a que el incremento de la inversión pública volvió a ser explosivo al siguiente año, estableciendo un nuevo récord

Cuadro 3.5

EL GASTO PÚBLICO EN MÉXICO Y SU IMPACTO PRODUCTIVO
1971-1976

(Tasas porcentuales)

	Tasa de crecimiento real anual de la inversión pública	*Crecimiento real PIB*	*Crecimiento real producción agropecuaria*	*Crecimiento real inversión privada*
1971	—26.6	2.5	1.7	7.3
1972	40.8	7.2	—2.6	5.6
1973	33.2	7.5	2.0	2.7
1974	4.9	5.9	3.2	16.0
1975	43.6	4.1	—0.6	4.7
1976	—17.8	2.1	0.3	3.2

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México, *Informes anuales* y de NAFINSA, *La economía mexicana...*, cit., pp. 38-40.

(creció 43.6% en 1975, véase nuevamente Cuadro 3.5), se desmoronaban a todas luces las tasas de crecimiento del producto y de la inversión privada.

El fracaso de la tentativa de extensión del ciclo de crecimiento económico tenía fundamentalmente que ver con la disfuncionalidad de toda la política estatal. Hacia ella apuntaban las restricciones que enfrentaba la tasa de ganancia, la inflación y el deterioro del crédito bancario. Además a diferencia del auge de 1963-1967, que había partido de un aumento importante de la capacidad productiva (y correlativamente de la capacidad industrial sin utilizar),[13] el auge artificialmente inducido de 1972-1975 se produjo en el contexto de numerosos "cuellos de botella", sobre todo por el déficit en la producción de insumos industriales básicos (como el acero, que el Estado atendió tardíamente) y el estancamiento de la producción agrícola, que había logrado sólo una reactivación efímera. No debe olvidarse tampoco que, en la primera mitad de la década del setenta, México era un importador neto de petróleo como consecuencia de la política de sobrexplotación de los mantos petroleros.

Tales contradicciones no constituían aspectos aislados, sino estrechamente ligados entre sí y con la estructura del sistema estatal, de tal manera que entre los episodios anteriores de inadecuación parcial de la intervención del Estado y la situación de mediados de los años setenta, existe una diferencia cualitativa, en términos de la presencia de un deterioro de su capacidad de gestión económica. En ese sentido, la disfuncionalidad de la intervención estatal refiere una ostensible falta de correspondencia entre el sistema estatal (incluidas las formas de dominación política) y el desarrollo del capitalismo en el país. Por ello la propia intervención estatal también entra en crisis y al hacerlo no podía dejar de expresar y transmitir sus propias contradicciones al resto del sistema capitalista, vulnerando aún más los niveles de la tasa de ganancia.

En la gestación de lo que podemos denominar *crisis estatal* concurren dos órdenes generales de fuerzas: 1] las de índole histórica, propias del desarrollo del capitalismo en México y de su forma estatal, que habían condicionado una modalidad y grado de intervención estatal fuertemente sesgada hacia el desequilibrio financiero y el sobreproteccionismo, y, desde la perspectiva política, el peso del populismo y la corrupción que concluyeron por tener efectos económicos propios; 2] los factores actuantes a partir de los cambios en la política económica ocurridos desde principios de la década del setenta, que aceleraron la evolución hacia la crisis. De hecho, los factores históricos y los cambios más recientes tendían a conjuntarse peligrosamente, ya que el margen de maniobra del Estado se estrechaba a ojos vista.

4. EL PÁNICO Y LA CRISIS ECONÓMICA DE 1976

Entre otros aspectos de la relación entre el deterioro de la capacidad de gestión económica del Estado (o sea la creciente disfuncionalidad de su

política de intervención económica) y el rápido desenvolvimiento de la crisis, merece destacarse el hecho de que, concluida la primera mitad de los años setenta, la política expansionista enfrentaba obstáculos crecientes, en un momento en el que se desvanecían las posibilidades de mayor endeudamiento, sobre todo por la recesión del comercio mundial en 1975, que a ojos de los banqueros internacionales estaba provocando una caída muy peligrosa de la capacidad de pago de los países endeudados. Esto planteaba dos problemas relativamente nuevos en la historia económica reciente del país: 1] la inminencia de un fuerte impacto recesivo (con desinversión y desempleo récord), debido al grado de amplitud que había alcanzado la participación del Estado en la actividad económica general, y por lo tanto el impacto del reflujo, una vez que mermara la afluencia de nuevos empréstitos; 2] la relativa dificultad para lograr una reactivación rápida, a la manera de 1972, por la sencilla razón de que el sobrendeudamiento y el desgaste de los instrumentos típicamente inflacionarios parecían bloquear el uso expansionista de éstos.

Como consecuencia de ambos factores no tardó en generarse una ola de pánico (similar, según algunos observadores, al de la crisis del 29), de manera tal que, hacia mediados de 1976, la fuga de capitales, la especulación y la amenaza de quiebra bancaria tomaron una proporción insospechada. A causa de la fuga de capitales (estimada oficialmente en unos 2 600 millones[14] de dólares en 1976) y la amenaza de mayores retiros, el Banco de México tuvo que aportar una línea especial de crédito de 12 mil millones de dólares, para evitar un colapso del sistema bancario nacional. Con esos alcances, puede decirse que habían irrumpido parcialmente los elementos de la crisis financiera que harían estragos en 1982, con su secuela de bancarrota de las finanzas públicas y nacionalización de la banca.

La asistencia del FMI y acciones de emergencia, como el ya citado multimillonario respaldo a la banca, evitaron que el colapso económico adquiriera toda su potencialidad y amplitud.[15]

IV. La fallida reorganización económica y la nueva política expansionista-inflacionaria, 1977-1981

1. EL CARÁCTER DE LA REORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE 1977 Y SUS CONTRADICCIONES

Dicho está que el rigor de la crisis económica en 1976 y la ola de pánico financiero forzaron la aplicación de un estricto programa de "reordenación económica", auspiciado por el FMI y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que intentaba combatir la "crisis fiscal" heredada del periodo de expansionismo inflacionario de 1972-1976. Con el ajuste de precios y tarifas de los servicios públicos y la aplicación de nuevos impuestos se logró elevar apreciablemente el ahorro del sector público (del 2.5% del PIB en 1976 al 3.1% en 1977). Se adoptaron también medidas monetarias diversas para estimular el ahorro privado y la actividad bancaria; principalmente se redujo la reserva bancaria legal de su nivel de 50% en promedio en el sexenio anterior a 39.5% en 1977.[1] Además, se aminoraron las restricciones cuantitativas a las importaciones, sustituyendo las licencias de importación (pieza clave de la política proteccionista desde los años cuarenta) por aranceles, cambio que parecía presagiar una radical reordenación de la política comercial tradicional. La tasa de emisión monetaria, por su parte, se redujo al 10% anual, prácticamente un submúltiplo de la tasa de 1976. En forma paralela se atacó la escalada inflacionaria, a través de un programa de control salarial y de los precios de algunos productos básicos ("alianza para la producción").

Todas estas medidas indujeron el ahondamiento de la recesión en 1977 (la inversión privada cayó 17%). Las restricciones fiscales lograron mitigar los efectos del sobrendeudamiento y la presión del desequilibrio de las cuentas con el exterior (véase Cuadro 4.1), permitiendo recuperar la confianza de la burguesía.

Detrás de la fachada de ajuste coyuntural se escondía un amplio plan de reorganización económica, que se proponía atacar las contradicciones de fondo presentes en la escena económica desde principios de los años setenta (agudizados por la política echeverrista). Hemos asentado anteriormente las circunstancias por las que la política salarial reformista vulneró la rentabilidad del capital; también hemos señalado que la ampliación de las funciones estatales y del gasto público en gran escala crearon fuertes tensiones fiscales y financieras; hemos señalado asimismo que el populismo y la corrupción consumaron la pérdida de eficiencia productiva del gasto público, junto con el incremento de las fugas de fondos.

Las acciones de reorganización económica y de racionalización de la

Cuadro 4.1

LA MEJORÍA EN LAS OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS CUENTAS CON EL EXTERIOR, 1974-1977

(Porcientos del PIB)

	1974	*1975*	*1976*	*1977*
Déficit global del sector público	—7.0	—8.9	—9.5	—6.8
Superávit (o déficit) de las operaciones de las empresas públicas	—0.6	—0.8	0.3	0.4
	(Millones de dólares)			
Balanza comercial	2 500	3 884	2 787	2 342
Cuenta de capital	3 822	5 459	5 070	2 276
Variaciones de la reserva (—, disminución)	—58	192	—257	562

FUENTE: FMI, *Boletín del FMI*, 24 de abril de 1978, y NAFINSA, *México en cifras...*, cit., p. 385.

intervención estatal pretendían dar una respuesta precisamente a estas contradicciones y combatir el deterioro de la capacidad de gestión económica del Estado. Como parte de la llamada "reforma administrativa"[2] se creó una nueva Secretaría de Estado (de Programación y Presupuesto), en la que quedaron ubicadas figuras del alto personal tecnoburocrático que defendía las tesis de control del gasto público y la eficiencia capitalista.[3] Para fortalecer la tasa de plusvalía se adoptó un estricto control salarial que mantuvo el incremento de los salarios reales en un 4-8% por debajo del incremento anual del costo de la vida (véase Cuadro 4.2).

No obstante que el Estado contaba entonces con amplia base de apoyo para aplicar el plan de reorganización capitalista y llevarlo hasta niveles concluyentes, se hallaba objetivamente en medio de una contradicción, que tenía que ver con la repentina conversión de México de importador neto de petróleo en uno de los primeros productores mundiales. El margen de maniobra y el apoyo del que disponía el Estado encontraban su raíz explicativa principal en la recuperación de la confianza tanto de la banca internacional y del gobierno de los Estados Unidos como de la propia burguesía nacional, que había empezado a repatriar los capitales fugados durante el pánico financiero de 1976. López Portillo había logrado además articular[4] al sector eficientista de la tecnoburocracia con los cuadros de disciplina echeverrista y formular planes coherentes y relativamente equilibrados para la acción a corto plazo (combate de la coyuntura recesiva) y de largo plazo (apertura de un periodo de crecimiento prolongado y estable). El régimen contaba también con sólida estabilidad política, ya

Cuadro 4.2

COSTO REAL DE LA MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA EN EL SECTOR MANUFACTURERO, (1975=100)

1974	*1975*	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*
89.52	100.0	100.6	96.4	95.4	94	92.3

FUENTE: Oficina de asesores del presidente, op. cit., p. 103.

que más allá de algunos brotes huelguísticos y de oposición política aislados, la institucionalidad y el consenso social estaban virtualmente intactos. La "reforma política" había logrado atraer hacia la institucionalidad a un importante sector de la izquierda, con lo cual el margen de maniobra del régimen se acrecentaba considerablemente.

Por lo que respecta al papel del petróleo, sabemos que la certidumbre de vastos yacimientos petrolíferos en el sudeste del país (y en su plataforma continental) databa de 1974, cuando esta noticia empezó a aparecer reiteradamente en los informes de la CIA al presidente de los Estados Unidos. Por otra parte, la multiplicación de los precios del petróleo, entre 1973 y 1974, elevó el valor comercial de toda la riqueza petrolera del mundo. Esto empujó tanto a México como a otros países hacia un plan de explotación de nuevos recursos petroleros que le permitiera participar en la extraordinaria transferencia de riqueza desde los países industrializados (y el conjunto de los países importadores) hacia la OPEP, por el incremento de la renta del suelo (se calcula que la multiplicación de los precios del crudo entre 1973 y 1974 significó una transferencia anual equivalente al 2% del PIB de los países industrializados, o lo que es lo mismo, medio año de los frutos de su crecimiento económico).[5] De esta manera, cuando López Portillo tomó posesión de su investidura presidencial autorizó una expansión masiva de la inversión pública con vistas a elevar

la plataforma petrolera, que fue revisada e incrementada dos veces, hasta que se convirtió en un plan definitivo de inversión para el periodo 1977-1982 (como parte del Plan Nacional de Desarrollo Industrial), que pretendía canalizar hacia el sector petrolero y petroquímico (incluida petroquímica secundaria) 20 mil millones de dólares, o sea poco más de una cuarta parte del total de la inversión pública para el periodo (los gastos de capital de PEMEX representarían la mitad de la inversión del sector público).

Este ambicioso plan proyectaba elevar la producción de petróleo crudo a unos 2.2/2.5 millones de barriles diarios para 1980: las exportaciones a 1.1 millones en ese mismo año; la extracción de gas a 4 mil millones de pies cúbicos al día; la refinación de productos (de casi cero) a 300 mil barriles diarios y, finalmente, la triplicación de la capacidad petroquímica nacional, hasta llegar a unos 18.6 millones de toneladas, en 1982.

Para lograr el extraordinario desarrollo previsto se requería de grandes inversiones y empréstitos. Tomando como base los precios de 1977, se podría lograr un ingreso de 4 500 millones de dólares al año (ingreso que llegó a triplicarse con el segundo shock petrolero en 1979-1980); así quedaba todavía un faltante de 6 mil millones de dólares, que tendrían que obtenerse por la vía de empréstitos internacionales. Pese al sobrendeudamiento externo (o a los límites impuestos por el FMI), el Estado mexicano empezó a maniobrar desesperadamente para obtener el capital adicional.[7]

Tanto el proyecto de reorganización capitalista como el programa petrolero eran partes neurálgicas del proyecto estatal, pero no por ello quedaba mitigado su carácter antagónico. Las repercusiones negativas que planteaba un acelerado desarrollo petrolero fueron objeto de una discusión amplia en la que participaron agencias internacionales (como el Banco Mundial y la CEPAL), revistas especializadas, observadores nacionales y extranjeros. La discusión se centraba sobre dos argumentos que retenían en el análisis la experiencia de los países petroleros recién enriquecidos. El primer tipo de argumento señalaba que la inyección masiva de petrodólares a la economía mexicana, convaleciente aún de los estragos del crecimiento lento de la productividad del trabajo, de la insuficiencia del transporte y del estancamiento agrícola, iba a provocar una estampida en ciertas ramas de la producción (las más ligadas al medio petrolero) y una respuesta nula o muy débil en otras; ello daría lugar a un proceso de crecimiento muy desigual y a profundos desequilibrios (sobre todo a una fuerte inflación, que concentraría aceleradamente la riqueza generada).[8] El otro hilo argumental apuntaba que el ingreso de petrodólares provocaría una fuerte ampliación de la demanda, que generaría a su vez una presión continua hacia la apreciación real del peso en términos del dólar (sobrevaluación), fenómeno muy común en países petroleros de desarrollo medio como Irán, Venezuela o Libia.[9] Era obvio que estas tendencias, en caso de imponerse, contradirían, de manera objetiva, los planes a largo plazo de reorganización capitalista, ya que la agudización del desarrollo desigual, la sobrevaluación del peso, la inflación, etcétera, socavarían las bases de un fortalecimiento generalizado de la tasa de plusvalía.

Evidentemente, la estrategia del gobierno (con los planes nacionales de desarrollo y global de desarrollo) pretendía dar una respuesta a esas contradicciones potenciales. Al crear un núcleo líder de grandes empresas estatales (extracción de petróleo-refinación-petroquímica-acero-metalmecánica) pretendía construir o consolidar una fuerza de empuje que no operara en el vacío, como sucedió en cierto sentido en 1975-1976, sino que canalizara el grueso de la renta petrolera con fines directamente productivos. Además, al tratar de sostener una tasa de crecimiento real del PIB por encima del 8%, se generarían empleos suficientes como para absorber el crecimiento de la fuerza laboral y se propiciaría un efecto redistributivo del ingreso. En la lógica gubernamental, la liberalización del comercio exterior proporcionaría una válvula de escape, que mitigaría los excesos de la demanda. El propio desarrollo de las exportaciones petroleras suministraría, según esto, los ingresos suficientes para sostener un nivel de servicios de la deuda externa menor al correspondiente a 1977 (0.38) y por supuesto abatiría las restricciones financieras que habían gravitado fatídicamente sobre la expansión estatal de la primera mitad de los años setenta. Finalmente, para evitar la concentración excesiva de la actividad económica se planeaba un esquema de otorgamiento de subsidios (CEPROFIS) que pretendían animar la desconcentración y orientar las actividades industriales hacia un eje de puertos con grandes facilidades de infraestructura: puertos industriales tales como Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Ostión, Altamira, Salina Cruz.

2. HACIA EL AUGE ESPECULATIVO Y LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN ARTIFICIAL DEL CICLO ECONÓMICO

2.1. *El abandono de la política de reorganización capitalista*

Como resultado de los poderosos estímulos económicos que derivaban del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, la acumulación de capital experimentó un verdadero salto en 1978. La formación bruta de capital fijo creció en una tasa cuatro veces superior a la de 1977, o sea a un 18% real, en tanto que el PIB lo hizo en un 8.2%. El extraordinario crecimiento de la inversión privada que acompañaba a la inversión pública era el resultado de una verdadera sucesión de olas de inversión, mediante las cuales los empresarios ampliaban febrilmente la capacidad de producción impulsando importaciones, adquisiciones de equipo nacional y construcción de nuevas instalaciones,[10] con lo que la economía nacional ingresaba en una de las fases de auge más extraordinarias de toda su historia, el *boom* petrolero. Según datos recabados por encuestas entre empresas registradas en la bolsa de valores, el inicio del auge estuvo marcado por una significativa recuperación en los niveles de lucro de las operaciones industriales

y comerciales, presagiando un desempeño aún mayor para el año siguiente.[11] En consecuencia, la acumulación de capital continuó robusteciéndose y en 1979 el PIB creció a una tasa récord de 9.2% y la inversión privada y pública al 17 y 22% respectivamente.

Sin embargo, en 1980 se produjo un peligroso cambio. Aún en pleno auge y en medio de las fuerzas expansionistas desencadenadas por la estrategia gubernamental de gasto y elevados subsidios, y no obstante el segundo shock petrolero (que acercaba los ingresos anuales a los 12 mil millones de dólares en 1980), el ritmo de la acumulación de capital se desaceleró perceptiblemente y se hicieron evidentes fuertes restricciones: la inflación subió del 20 al 30%, el crecimiento del PIB se redujo en un punto porcentual y la formación de capital, según los datos del Banco de México, bajó de 20% al 14.9% (véase Gráfica 4.1). Detrás del aumento de la inflación se desplegaba un fuerte aumento de costo,[12] producto de múltiples factores como, por ejemplo, la insuficiencia de fuerza de trabajo calificada (principalmente) y, pese al diluvio de petrodólares, escasez de crédito. Aunque esto parezca particularmente sorprendente, la relación entre los acervos de la captación bancaria y el PIB había bajado a un 26% en 1978-1982, desde un 31% en 1969-1973 (Cuadro 1.6), no obstante que la circulación monetaria había recibido una poderosa afluencia de petrodólares y eurodólares. Por ello no fue raro que las empresas empezaran a endeudarse en dólares, aumentando en consecuencia su vulnerabilidad financiera.

El desconcertante cuadro de desaceleración de la expansión económica en pleno apogeo del *boom* petrolero, que recordaba en escala menor lo que había sucedido en 1974-1975 (cuando el gasto público actuaba también como propulsor), tenía que ver, por una parte, con las contradicciones y la oposición entre el proceso de reorganización económica y las ambiciones de apropiación rápida de la renta petrolera y, por otra parte, con dificultades para mantener un equilibrio en medio de las fuertes presiones emanadas del propio auge petrolero, principalmente debido al hecho de que la economía mexicana no estaba materialmente preparada para soportar un proceso de expansión tan rápido, a causa de los múltiples estrangulamientos en su aparato productivo, tal como lo habían anticipado varios observadores.

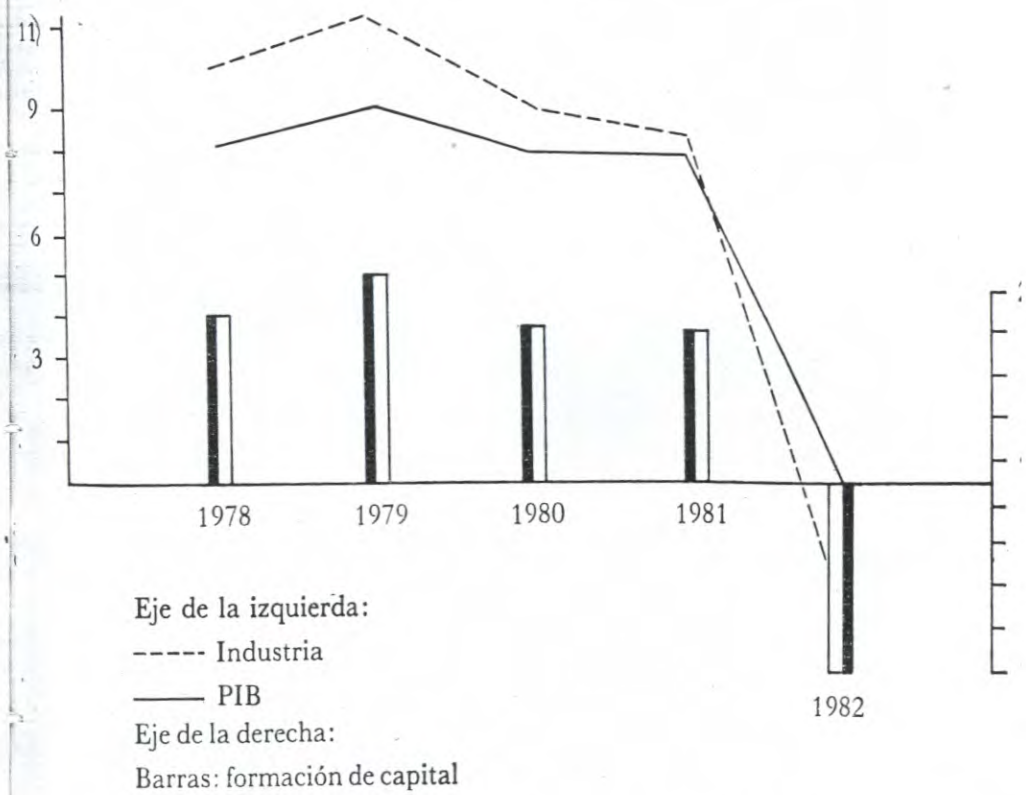
Además, a medida que el comportamiento de los precios del petróleo se volvía más favorable, el régimen de López Portillo se desplazaba abiertamente hacia una estrategia expansionista, que abandonaba el énfasis en la racionalización y la búsqueda de eficiencia que habían caracterizado el primer año de su gestión. El sector eficientista de la tecnoburocracia, que había tenido un papel importante en la definición de la política de reforma administrativa, empezaba indiscutiblemente a perder terreno en lo que concernía a la definición e implementación de la política económica fundamental. La negativa a ingresar al GATT, anunciada en marzo de 1980, significaba un giro hacia una línea intervencionista de corte keynesiano,

Gráfica 4.1

LA DESACELERACIÓN DEL AUGE PETROLERO

Tasa de crecimiento del PIB, la producción industrial y la formación de capital

(Porcientos)



Nota: Los datos publicados por la Secretaría de Programación y Presupuesto no registran la declinación correspondiente al año de 1982.
FUENTE: Banco de México, *Informes anuales*, varios años.

que recuperaba los tópicos del proteccionismo y de la prioridad de los subsidios. De manera significativa el anuncio del no ingreso al GATT coincidió con la adopción de las primeras acciones del Sistema Alimentario Mexicano, que habían diseñado prominentes seguidores nacionales de la escuela de Cambridge y cuyo objetivo central era reactivar la producción agrícola sobre la base de conceder generosos subsidios.

Además, el proyecto de reorganización (tal como estaba planteado en los planos Industrial y Global) no había logrado crear una estrategia para conciliar y resolver contradicciones fundamentales que aquejaban al sistema económico del Estado y, por lo tanto, a medida que las tensiones de la coyuntura económica (del auge petrolero) se intensificaban, empezaban a aparecer signos inequívocos de fractura dentro de la estrategia de reorganización, se agudizaban de nueva cuenta viejas trabas financieras como el déficit del sector paraestatal.

Esto se explica de la siguiente manera: el gobierno lopezportillista asignó a la empresa estatal, a través de sus dos planes fundamentales, objetivos en el fondo claramente contrapuestos y que habían estado reñidos a todo lo largo de la historia del intervencionismo del Estado mexicano desde los años sesenta. Primeramente se quería que los precios de los insumos estratégicos producidos por empresas como PEMEX, CFE, Sidermex, Fertimex, etcétera, estuvieran a un nivel inferior que su contraparte internacional (para apoyar así al capital nacional en la competencia intercapitalista mundial). Por otra parte, se buscaba también que dicho diferencial de precios no condujera a la sobreprotección industrial, cuyo papel en su desestímulo a la eficiencia era ya ampliamente reconocido. Por si fuera poco, por otro lado, se postulaba también que las empresas estatales deberían ser capaces de generar ahorro para financiar al menos una parte de su propia inversión.[13]

Además de que técnica y económicamente era muy difícil conciliar simultáneamente estos tres objetivos, el fenómeno de la petrolización, al que haremos referencia detenida en el apartado siguiente, complicó más el proceso al agudizar la inflación y en general al intensificar un conjunto de desequilibrios latentes de la economía mexicana. Veremos que la mayor fuerza desequilibradora provino de los mayores requerimientos de subsidio (por vía de las empresas estatales) ante el incremento de costos provocados por la política de crecimiento a toda costa, sobre todo a partir de 1980, cuando el supuesto equilibrio entre el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (que expresa la visión del sector nacionalista keynesiano de la tecnoburocracia) y el Plan Global (la del sector eficientista) se rompió abiertamente.

2.2. *Petrolización y auge especulativo*

La prematura desaceleración del auge, que se escapaba de las manos del Estado pese a la gran cantidad de recursos que el *boom* petrolero le transfería, era el resultado inevitable de la petrolización de la economía mexicana, fenómeno que tendía a anticipar la sobreacumulación de capital y a desviar el auge hacia un sendero fuertemente especulativo.[14]

La petrolización descansaba en el explosivo incremento en el caudal de la circulación capitalista debido a la afluencia de petrodólares y empréstitos en dólares, incremento que sobrepasaba las posibilidades materiales de la valorización productiva del capital. Esta última tendía a responder con relativa lentitud, en función de la concurrencia de las restricciones ya enumeradas y del lento crecimiento de la productividad del trabajo y la ineficiencia del transporte (véase Cuadro 4.3). En consecuencia se producía un doble resultado monetario y cambiario, que arrastraba otras consecuencias sobre el proceso de valorización del capital: la inflación consumía el valor de los activos monetarios (en una palabra, el capital dinero) y aceleraba febrilmente la actividad mercantil, con el fin de cambiar dinero por mercancías (tanto de tipo productivo como no productivo) para proteger los valores de cambio. Este proceso inducía por su propia lógica la sobreacumulación de capital y, por tanto, intensificaba las contradicciones de la fase alta del ciclo. En efecto, la intensa actividad mercantil indujo a la generalidad de los empresarios a efectuar adquisiciones extraordinarias de activos fijos de capital, vía importaciones o compras internas, cuyo grado de operatividad posterior quedó considerablemente mermado por la insuficiencia de capital circulante, asociada a los estrangulamientos de la oferta y la insuficiencia de los medios de transporte ya mencionados. Por todo ello, no era raro que una encuesta realizada en esos años recogiera el consenso de los capitalistas de que las extraordinarias oportunidades de mercado estaban perdiéndose en alguna medida, por la insuficiencia de materias primas e insumos. Esa sobreacumulación de activos fijos (la contraparte de la escasez de capital circulante) a su vez repercutía sobre los costos de operación de las empresas y minaba la rentabilidad, ya que los porcentajes de la capacidad industrial redundante se mantenían altos (alrededor del 20% en 1980-1981), consecuencia directa de la insuficiencia de capital circulante y de los retrasos en las entregas por el deficiente sistema de transporte.

Por otra parte, el acrecentamiento de las reservas internacionales de divisas (petrodivisas) inflaba el poder de cambio del peso mexicano en relación con las divisas extranjeras, lo que empujaba a un exorbitante creci-

Cuadro 4.3

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR MANUFACTURERO

(Tasa de crecimiento anual)

1975	*1976*	*1977*	*1978*	*1979*	*1980*	*1981*	*1982*
—1.63	—8.57	4.83	3.95	2.21	—2.92	—3.23	—2.1[e]

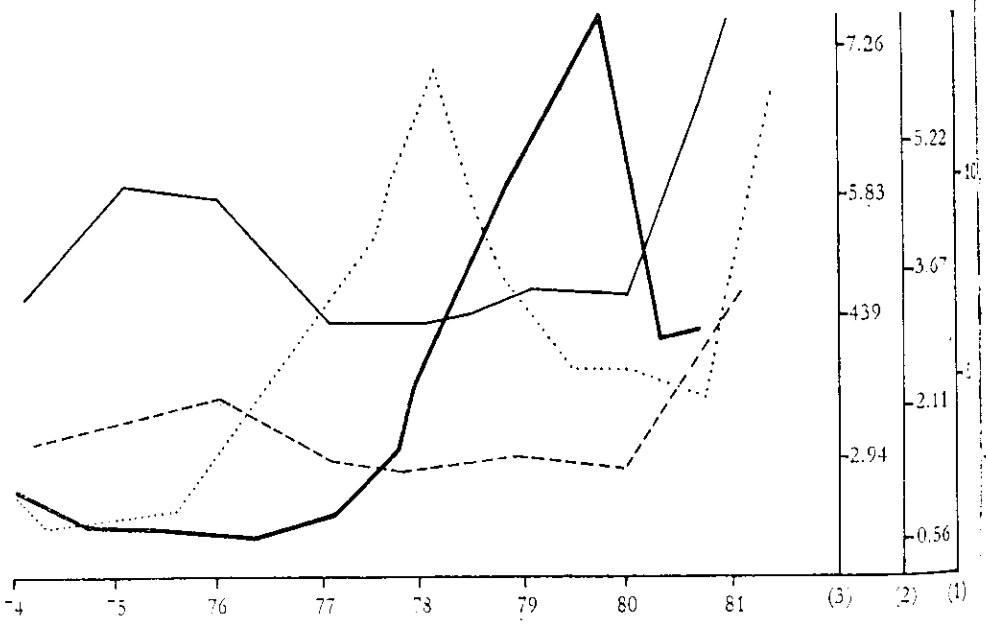
[e]: *Estimado*

FUENTE: Asesores del presidente, *XI informe gráfico...*, cit., p. 105.

Gráfica 4.2

DÉFICIT DEL GOBIERNO FEDERAL, ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO Y SU SERVICIO, 1970-1981

(Como porciento del PIB)



Vertical (1): Déficit financiero del sector público (———) y déficit del gobierno federal (– – –)
Vertical (2): Endeudamiento neto del sector público (....)
Vertical (3): Servicio de la deuda externa (▬)

FUENTE: Asesores del presidente, op. cit., pp. 24 y 37.

miento de las importaciones que se conectaba (y satisfacía) con el afán de encontrar medios para proteger los activos monetarios.

El proceso especulativo —que después aceleraría tanto la devaluación como el agotamiento de las reservas internacionales del banco central— estaba ya presente en la intensificación de las actividades mercantiles: sobreadquicisión de componentes de capital fijo, bienes inmuebles, oro, divisas, etcétera,[15] y tendía a acelerarse a medida que las formas corrientes de valorización productiva del capital se restringían ante los estrangulamientos de la oferta. Puede decirse, en este sentido, que la especulación se estaba convirtiendo, por los efectos de la petrolización, en una válvula de escape a la que recurrían ampliamente capitalistas, rentistas, funcionarios públicos, etcétera, para proteger la riqueza que acumulaban.

Por lo anterior cabe diferenciar claramente, dentro del auge petrolero, dos periodos, el de 1978-1979 y el de 1980-1981. En este último, las fuerzas especulativas e inflacionarias y el crecimiento puramente basado en el crédito, comunes a todo auge capitalista en su punto de alta coyuntura, se intensificaron y prepararon activamente el camino para una catástrofe financiera de grandes proporciones.

2.3. *Las consecuencias de la política económica de expansión inflacionaria del ciclo económico*

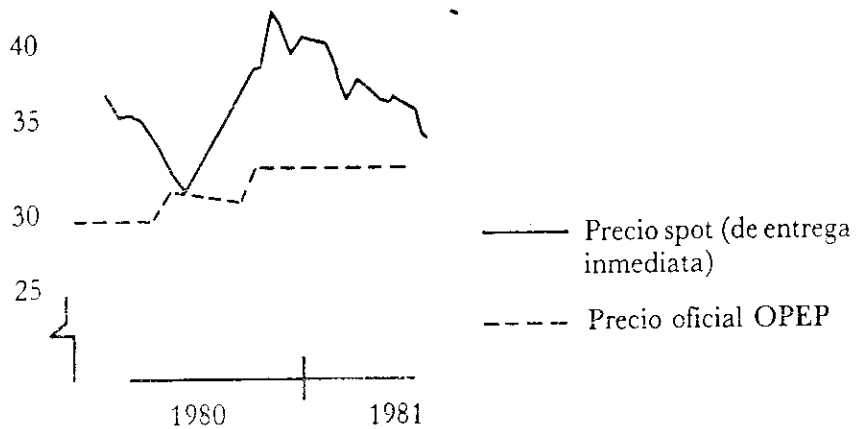
Ante la situación descrita, el Estado mexicano aplicó, entre 1980-1981, una política de inspiración keynesiana que buscaba alargar el ciclo de crecimiento, tal como lo había intentado años atrás Echeverría. Para ello, se apoyaba en la renta petrolera, que servía de fuente de recursos fiscales y de aval de préstamos extranjeros. En la Gráfica 4.2 se puede observar cómo, a partir de 1980, las curvas del déficit fiscal y del endeudamiento externo, que se habían mantenido relativamente bajo control, experimentaron un súbito repunte, en el que se ponía de manifiesto el esfuerzo de la política de expansión inflacionaria. No obstante ese esfuerzo encontramos un conjunto de factores en contra. En primer lugar, la petrolización y su ya explicado impacto especulativo. En segundo lugar, en la medida en que el proceso de reorganización capitalista estaba siendo abandonado, las condiciones de productividad del trabajo presionaban hacia un ascenso de los costos de producción. Eso significaba que las ganancias del capital tenían que depender de subsidios, para resistir el referido ascenso de costos. Para 1981 los subsidios representaban ya el 16% del PIB.[16]

Por si fuera poco, el recurso del expansionismo inflacionario propendía a ligar el auge a factores externos, a la cotización del petróleo y a la evolución de las tasas de interés, con lo que crecía su vulnerabilidad. Desde noviembre de 1979 las tasas de interés habían empezado a crecer rápidamente y, para mediados de 1980, la tasa prima de Estados Unidos oscilaba en torno a 16%, la más alta de toda la historia. En contraste, la situación del mercado petrolero no podía ser mejor en 1980. Por efecto del segundo "shock petrolero", el precio del crudo ligero mexicano estaba llegando a 38 dólares por barril, nivel ni siquiera imaginado cuando el programa petrolero era sólo un documento, en 1977. Sin embargo, detrás de la segunda conmoción del mercado actuaban factores de índole muy distinta a los de 1973-1974, o sea factores geopolíticos como la guerra del Golfo Pérsico. Por ello el fenómeno alcista de 1979-1980 tendió hacia una pronta mitigación. Además, la incorporación de los yacimientos del Mar del Norte (explotados conjuntamente por Gran Bretaña y Noruega), de México y de otros países, habían elevado considerablemente la oferta, en medio de un proceso de creciente ahorro de energía y racionalización general de los sistemas de consumo de petróleo en los países industrializados. En este sen-

Gráfica 4.3

PRECIOS DEL PETRÓLEO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

(Crudo árabe ligero)



FUENTE: *Petroleum Intelligence Weekly*, tomado de *World Business Weekly*, Londres, 25 de mayo de 1981.

tido era evidente que los precios del crudo estaban experimentando un lento pero decidido ajuste a la baja,[17] situación que era fácilmente observable en el mercado petrolero mundial desde el primer trimestre de 1981 (véase Gráfica 4.3).

El equipo de López Portillo tenía una visión completamente distinta, según se desprende del Plan Nacional de Energía, anexo al Plan Nacional de Desarrollo Industrial. El referido plan suponía que el precio internacional del petróleo aumentaría, en términos reales, a una tasa de 5-7% hasta el año 2000, lo que significaría un precio muy superior a los cuarenta dólares para principios de 1982 e ingresos anuales por exportación de crudo de poco más de 20 mil millones de dólares. Las expectativas nunca se realizaron y la posibilidad de sostener artificialmente las ganancias y alargar el ciclo estaba condenada al fracaso.

El evidente curso contradictorio de la economía mexicana y su creciente vulnerabilidad financiera indujeron en los keynesianos una respuesta y la precisión de sus propuestas de política económica, fuente de inspiración del gobierno de José López Portillo. Una de las argumentaciones mejor fundamentadas era la que planteaban Eatwell y Singht (facultad de Economía de Cambridge),[18] quienes se apoyaban en el modelo de simulación del comportamiento de la economía mexicana efectuado por el CIDE.

Los autores, con base en un análisis típicamente keynesiano, trataban de demostrar que la economía mexicana no estaba "sobrecalentada" y que por tanto se encontraba en condiciones de sostener su proceso de expansión sin presiones inflacionarias excesivas. Insistían en la inexistencia de una presión excesiva de la demanda por tres razones: 1] las grandes inversiones iniciadas en 1977 habían originado una firme expansión del sector manufacturero; 2] existía suficiente capacidad no utilizada, producto precisamente de la gran ampliación de las instalaciones asociada al dinámico ciclo de las inversiones; 3] la liberalización de los controles al comercio exterior permitía que los productores mexicanos importaran con facilidad bienes de capital y extendiesen ulteriormente la capacidad de producción.

Con respecto a la agudización del déficit comercial sostenían que no era demostrable que el exceso de demanda fuese responsable de la caída de las exportaciones mexicanas de manufacturas ("8% real en 1980"). Esa caída debería explicarse más bien por la contracción de los mercados exteriores y la generalización de las tendencias proteccionistas mundiales. En su opinión, la mejor alternativa a una política contraccionista y devaluatoria (que provocaría "un peligroso incremento del desempleo y la inflación") radicaba en un programa estricto de "controles directos y selectivos a las importaciones" que moderaría su crecimiento, naciendo posible la estabilidad de precios y cambios, así como un incremento mínimo del 8% del PIB. Señalaban, por otra parte, que la existencia de un margen de racionalización de las importaciones y de capacidad industrial sin utilizar, evitaría "condiciones de monopolio" para los productores nacionales, al disminuir la competencia externa. Finalmente la aplicación escrupulosa del programa permitiría congelar el tipo de cambio ya que el crecimiento de las importaciones no rebasaría el de los ingresos petroleros. Incluso consideraban que era posible suprimir el deslizamiento introducido por el Banco de México (las "microdevaluaciones").

Antes de considerar las implicaciones de esta política es preciso destacar que en 1980-1981 la actuación del Estado mexicano, por encima de matices diferenciadores, evolucionaba en la dirección planteada por Eatwell y Singht, principalmente ante la negativa a devaluar, argumentando que era posible lograr la reactivación de las exportaciones no petroleras a causa de la recesión mundial.

La concepción keynesiana pasaba por alto las implicaciones de la petrolización y los voceros del régimen la negaban enfáticamente: sostenían que la economía no estaba petrolizada, pues las exportaciones de petróleo no representaban más que el 4% del PIB. Sin embargo, la petrolización actuó como una palanca que aceleró efectivamente la sobreacumulación. En su momento, o sea en 1980-1981, la actividad puramente especulativa resultaba difícil de diferenciar de la inversión productiva; de hecho, gran parte de los activos fijos no constituían en sí elementos funcionales de la valorización capitalista sino valores de resguardo contra la inflación. La dificultad para distiguir los términos reales del problema alentó la suposición de que los márgenes de capacidad excedente en la industria eran una evidencia de la vitalidad del auge y de las posibilidades de extensión del ciclo, sin entender que sucedía lo contrario: la existencia de márgenes sustan-

ciales de capacidad no utilizada era más bien una evidencia de la contradicción del ciclo y de las crecientes restricciones creadas por la petrolización.

Pese a la importancia del punto, la tesis central de la Escuela de Cambridge apuntaba hacia el *aislamiento de la economía mexicana del mercado mundial*. Sostenían, como hemos visto, que un control estricto de las importaciones permitiría congelar el tipo de cambio, desvinculándolo de la relación comercial con el exterior.[19] La inhibición del intercambio comercial con el exterior que proponían Eatwell y Singht para congelar el tipo de cambio, no significaba otra cosa sino actuar a nivel de las simples manifestaciones y no de las causas de fondo; pero a la larga éstas tenderían a manifestarse en otros niveles. Sostener un peso artificialmente sobrevaluado alentaría a los inversionistas a que exportasen capital en dólares, para aprovechar las tasas más elevadas de interés (en Estados Unidos) y la baratura de esa divisa en el mercado nacional. De haberse aplicado esta política de manera sistemática (lo que fue impedido por el pánico) habría suscitado una cadena de controles: del control de importaciones se habría pasado al control de cambios (primero parcial y luego total) y finalmente a la nacionalización de la banca, o sea exactamente lo que se hizo, aunque por otras vías concretas.

Antes de que se pudiera dar paso a esa política de racionalización de las importaciones, la cadena se rompió por su eslabón más débil: el financiero; la fuga de capitales, acelerada desde que se conoció la baja de la cotización del petróleo de entrega inmediata, alcanzó proporciones monstruosas. Se calcula que poco antes de la devalución de febrero de 1982 salieron del país unos 11 mil millones de dólares. En esas cifras se refleja el grado de enriquecimiento de capitalistas y grandes funcionarios públicos. Se demuestra también la ineptitud del Estado para garantizar los medios necesarios para ejercer la valorización productiva del capital, con las tasas de ganancia exigidas por la burguesía; de allí que ésta recurriera crecientemente a la especulación y a la exportación de capitales.

Con la devaluación de febrero de 1982, que representó tanto el factor detonante de la crisis económica como el reconocimiento del fracaso de la política de gasto público y subsidios (y de extensión inflacionaria del ciclo), se asistió a una manifestación y un desarrollo todavía mayores de la crisis estatal. Aunque el auge petrolero había conseguido un importante crecimiento de la capacidad productiva del capital (principalmente de sectores como el petroquímico) no logró generar un avance de la capacidad industrial hacia el mercado mundial, esto es, no pudo desarrollar las exportaciones industriales, única vía por la cual un país capitalista puede generar condiciones de crecimiento relativamente sostenidas en la fase vigente de la economía mundial. Al contrario, el *boom* petrolero concluyó por obstaculizar esta vía y allanar el terreno para una crisis de grandes proporciones, por cuanto la capacidad de gasto y endeudamiento público tendían a agotarse, agotándose asimismo las posibilidades de sostener el nivel artificialmente elevado de la tasa de ganancia.

V. De la devaluación a la insolvencia financiera. Los antecedentes de la reorganización económica, 1982

Durante 1982 se precipitaron acontecimientos que implicaban una escalada más de la crisis. Su desencadenamiento era producto principalmente del carácter contradictorio y contraproducente de la política de intervención estatal, que alimentaba de manera adicional las contradicciones ya detonadas, constituyéndose de esta manera en un vehículo de propagación de la crisis estatal. El renovado radicalismo de ésta forzó, después de la generalización del pánico, a la adopción de medidas desesperadas de reorganización económica, que representaron el antecedente inmediato del proceso más sistemático emprendido a partir de diciembre de 1982.

1. EL FATÍDICO AÑO DE 1982 VISTO EN PERSPECTIVA

Cualquiera que sea el enfoque con el que se analice la crisis, existen ciertas evidencias incuestionables. La principal de ellas es la magnitud de la caída que experimentó la economía mexicana, luego de cuatro años de disfrutar de una de las transferencias más importantes de riqueza acaecidas en el siglo XX. En 1979-1980 (y aun en 1981), cuando la cúspide del auge petrolero, ingresaban al país cerca de 2 mil millones de dólares mensuales por empréstitos, más unos mil quinientos millones de dólares por exportaciones petroleras. Estos extraordinarios ingresos mensuales representaban una cantidad superior a las percepciones anuales que había obtenido el país por la exportación total de bienes y servicios a fines de los años sesenta o principios de la década del setenta.

Pese a la gran afluencia de riqueza, la economía mexicana no pudo eludir el recrudecimiento de sus problemas estructurales, experimentando un declive aún más pronunciado en todos los órdenes de factores: desempleo, inflación, endeudamiento... Dicha situación no puede ser explicada por la severidad de la recesión mundial, ni por el incontrolable incremento de las tasas de interés, ni siquiera por la caída de la demanda mundial del petróleo,[1] tal como lo sostenían los argumentos gubernamentales. Tampoco la explica suficientemente la simple consideración de las contradicciones que fueron sumándose a lo largo del auge petrolero, algunas de cuyas precondiciones hundían sus raíces en los últimos años de la década del sesenta. Para el caso no resulta ocioso ni inútil mencionar la existencia de países como Corea del Sur, Singapur o Indonesia, de fuerte industrialización y marcada dependencia de la demanda de los países imperialistas y de las corrientes internacionales de capitales (pero que no se beneficiaron con las transferencias de petrodólares en el grado que lo hizo México), los cuales

salieron relativamente indemnes de la crisis mundial: su crecimiento económico en 1980-1982 fue superior al 5% anual, sus reservas internacionales han permanecido sólidas y el servicio de la deuda externa sólo representa el 50% de sus ingresos por exportación en 1982.[2]

Para entender el profundo deterioro económico de 1982 es preciso centrar la atención sobre el conjunto de contradicciones que giran en torno a la actuación del Estado mexicano, a las que nos hemos referido como "deterioro de la capacidad de gestión económica estatal". Estas contradicciones constituyen una extensión de la caída de la tasa de ganancia y mantienen con respecto a ésta una interacción permanente. La presente crisis, como veremos, se ahondó bruscamente debido al escaso grado de control que logró el Estado sobre un caudal de factores, al grado que, en esos meses, era frecuente escuchar que llegó a perder la soberanía de su propia moneda, aseveración que si bien era exagerada reflejaba las crecientes dificultades del Estado mexicano para controlar la inflación y la especulación.

2. EL DETERIORO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO EN LA COYUNTURA POSDEVALUATORIA

A lo largo de 1982 se formuló y se puso en práctica una política destinada a luchar contra la crisis. En sí, esta política reveló un escaso grado de comprensión acerca de cuán profundas eran las contradicciones desatadas por la devaluación de febrero. Su ineficiencia favoreció la agudización de los problemas monetarios y financieros del país. Así, mientras el gobierno agravaba su déficit brindando nuevos subsidios al creciente número de empresas en dificultades (fuere por la caída de la demanda, fuere por la imposibilidad de importar), un promedio mensual de mil millones de dólares salían del país. Los depósitos bancarios literalmente se volatilizaban[3] y los precios del petróleo descendían a la par que se desaceleraba la producción y la inversión. Todo ello había sido antecedido por el descenso de los ingresos petroleros previstos (de los 20 mil millones de dólares programados sólo se recibieron 14 500 millones). La enorme expansión del déficit por importación de bienes y servicios amenazaba a su vez con rebasar el nivel de 13 mil millones de dólares alcanzado en 1981.

La primera respuesta del gobierno ante el estallido de la crisis fue el programa de "ajuste a la política económica", del 9 de marzo de 1982. Este correctivo pretendía evitar una caída de la producción.[4] Se anunció un recorte inmediato del gasto público del 3%, equivalente a unos 100 mil millones de pesos, cantidad ligeramente superior a lo que PEMEX dejaba de percibir como resultado de las dos bajas consecutivas del precio del crudo de exportación (la primera el 4 de enero de 1982 y la segunda el 1º de marzo). Pese a que el decaimiento de la actividad económica se traducía en un recorte de los ingresos fiscales (el gobierno dejaría de percibir, a lo largo del año, unos 150 mil millones de pesos debido a la incapacidad de las empresas para pagar sus impuestos) y no obstante que el servicio de la deuda pública externa había experimentado un agobiante incremento a consecuencia de la devaluación, el Estado se proponía absorber el 42% de la llamada "pérdida cambiaria" de las empresas, acción que le llevaría a asumir un gasto, conservadoramente calculado, de unos 35 mil millones de pesos.[5]

En suma, se trataba de mantener la ficción de que la economía mexicana estaba aún en condiciones de estabilizarse. Los infructuosos intentos de sostener la producción y la inversión se reafirmaron con el "Plan de Apoyo Financiero a la Industria", anunciado el 25 de marzo,[6] cuyos fines explícitos eran sostener la ganancia industrial (mediante mayores subsidios) y alentar el empleo. Dicho plan no era más que una copia extemporánea de la "Alianza para la Producción" que llevó a cabo el gobierno de López Portillo pocos meses después de la devaluación de 1976. El plan ofrecía CEPROFIS (Certificados de Promoción Fiscal), que variaban entre el 15 y el 80% de la nómina salarial, a las empresas que sostuvieran las líneas de producción priorizadas por el gobierno. El efecto expansionista de esta política era acentuado mediante grandes aumentos de la cantidad de dinero en circulación, cuyo ritmo de crecimiento se aceleró sobre todo desde mediados de año,[7] contribuyendo a agudizar aún más la inflación.

En abril, con un nuevo equipo de funcionarios, bien conocidos por su adhesión a principios de eficiencia capitalista y equilibrio presupuestario, que ocuparon los puestos clave de la administración pública (Secretaría de Hacienda, Banco de México, y poco antes en la Secretaría de Programación), se pretendió hacer frente a la situación en dos niveles: control del déficit y búsqueda de recursos financieros adicionales; el propósito expreso era obtener 11 mil millones de dólares en los mercados internacionales de capitales y recortar el gasto público en un 5% adicional[8] (vía alza de precios de los servicios públicos y otros bienes).[9] Contra estas pretensiones y pese a los pronósticos optimistas emitidos por analistas mundiales (se hablaba de un crecimiento real en México no menor del 6% y una inflación de sólo 30%)[10] a principios de año los inversionistas y bancos internacionales empezaron a negarse a colocar dinero a la manera como lo habían hecho hasta 1981; la solicitud de nuevos empréstitos como el de 2 500 millones de dólares, efectuado en el mes de marzo[11] (que era pieza clave en la búsqueda urgente de nuevos fondos), encontró un clima de grandes dificultades. Dado el momento y el monto de la suma solicitada, la reacción de la banca mundial era un elemento decisivo para la futura estabilidad financiera del Estado mexicano.

A pocas semanas de que el grupo Alfa había hecho público el anuncio de la suspensión del pago de amortizaciones de su deuda externa, el 1º de junio, en la Convención Nacional Bancaria (la última que se efectuaría), el gobierno comunicó el reingreso del Banco de México al mercado cambiario, añadiendo que la "crisis estaba bajo control" y que las reservas internacionales ascendían a 3 920 millones de dólares,[12] lo que representa-

ba, según ellos, un resguardo contra otra devaluación. A despecho de las declaraciones, la situación económica se deterioraba profundamente: a principios de junio, el mercado del eurodólar se negó a satisfacer el pedido de 2 500 millones efectuado dos meses antes por el gobierno (de 574 bancos a los que se había invitado a participar, 474 declinaron la oferta, pese a que el plazo máximo para comprometer fondos había sido postergado en tres oportunidades).[13] En las siguientes semanas el gobierno tuvo que hacerse cargo de Mexicana de Aviación, uno de los pilares de la empresa privada nacional, que se encontraba al borde de la quiebra.[14] Por si fuera poco, la tasa interbancaria de Londres subió de nuevo el 18 de junio, al 16%, dos puntos porcentuales por encima del nivel de marzo, lo que representaba un incremento de varios cientos de millones de dólares en el servicio de la deuda externa.

Para fines de junio, el margen de que había dispuesto el Estado para contener la crisis (estirando la cadena del crédito) estaba agotado. Desde abril había girado (en lo que constituía una acción de último recurso) sobre la línea de crédito SWAP, establecida con el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y había sorteado por unos dos meses la bancarrota sobre la base de onerosos empréstitos de corto plazo, con tasas de interés flotante. Al final, la imposibilidad de obtener el nuevo megapréstamo (que de cualquier manera sólo hubiese servido para posponer la catástrofe unos pocos meses) lo acercaba peligrosamente a la insolvencia, impidiéndole cumplir con la promesa de absorber la pérdida cambiaria de las empresas, que quedaban así expuestas a la bancarrota.[15]

Ante la imposibilidad de obtener nuevos préstamos gigantes, la Secretaría de Hacienda cambió su táctica: empezó a invadir el mercado con préstamos en pequeña escala (de 50 a 100 millones de dólares por operación) y trató de conseguir fondos por medio de aceptaciones bancarias, créditos a la exportación y emisión de bonos, por cuya colocación se ofrecían rendimientos récord en la historia del mercado bursátil.[16] En su desesperación por obtener divisas el gobierno mexicano, en el mes de junio, ofreció la mayor tasa de interés en el mercado de eurobonos (un cupón de 18.5%), para colocar una emisión de 100 millones de dólares.[17] Para ese entonces, el gobierno requería renovar 15 mil millones de dólares de corto plazo, otros 16 mil millones para remplazar otros vencimientos y 11 mil millones en nuevos préstamos.[18] Sin embargo, era evidente que aun bajo esa nueva táctica financiera México no reunía las condiciones para hacer frente a la situación. Por otra parte, su campo de acción en todos los sentidos se estrechaba peligrosamente. A modo de ejemplo, hacia julio el gobierno, después de largos titubeos, aplicó un ajuste limitado a los precios de los bienes controlados, con el fin de allegarse nuevos recursos, pero lo único que consiguió fue atizar el pánico y la zozobra de la población en general y de los capitalistas en particular. El pánico se canalizó hacia la compra de oro, dólares e incluso bienes de consumo duradero, drenando de pasada las exiguas reservas del Banco de México e inflando la hoguera de los precios; quedaba demostrado así que los ajustes limitados eran impracticables y contraproducentes. Había sonado entonces la hora de las acciones radicales.

La política de postergar la catástrofe, por medio del uso del crédito externo, fue posible en tanto la situación representaba un riesgo manejable a juicio de la banca mundial, riesgo del que se supo sacar el máximo provecho, pese al agotamiento de la capacidad de pago del Estado mexicano.[19] Al no tener una recepción favorable la solicitud de megapréstamos hecha en junio, la catástrofe financiera se hizo presente, dando lugar a reacciones irreversibles; se entraba así en un círculo vicioso en el que cada nueva acción desesperada que emprendía el gobierno conducía irremediablemente a otra. Con la segunda macrodevaluación del 5 de agosto, el establecimiento de dos tipos de cambio, uno preferencial de 49 pesos-dólar (para importaciones esenciales y el pago de amortizaciones de la deuda externa) y, otro ordinario de 75 pesos-dólar, el gobierno penetraba en un campo completamente nuevo: el racionamiento de divisas y el virtual control de las operaciones comerciales y financieras con el exterior, en el que pudo haber incursionado en condiciones mucho más favorables si no hubiese perdido el control de la situación, hacienda uso ciego de sus limitadas posibilidades de crédito, una vez devaluado el peso. Para aquel entonces, la estructura de la banca mexicana y sus formas básicas de funcionamiento (incluido el propio régimen de libertad de cambios, tradicional en el último medio siglo) eran ampliamente incompatibles con los nuevos objetivos y el propio gobierno estaba mal preparado en ese sentido. Un ejemplo puede resultar muy ilustrativo al respecto: a lo largo del año la banca comercial había obtenido sobre la base de operaciones con oro y divisas casi el 50% de sus beneficios.[20] Las profundas distorsiones generadas por la política de subsidios y de sobrevaluación del tipo de cambio determinaron que la compra de dólares fuera una fuente de lucro socialmente asumida, a la que el conjunto de las empresas y los ahorradores vertieron sus fondos suplementarios e incluso sus fondos básicos.[21] Así, la necesidad de reorganizar la banca, en uno u otro sentido, quedaba planteada desde principios de agosto de 1982, e iba adquiriendo carácter perentorio en la medida en que el Estado expropió (tanto por necesidad de fondos como a efecto de prevenir una nueva fuga de capitales) los depósitos en dólares de la banca privada nacional (los mexdólares, unos 12 mil millones de dólares) e intentó, en vano, retener las líneas extranjeras de crédito interbancario, que ascendían, en diciembre, a unos 7 mil millones de dólares[22]

Ante la bancarrota de hecho del Estado mexicano y su imposibilidad de colectar fondos en el sistema bancario, el gobierno de los Estados Unidos preparó un plan de rescate financiero por 8 750 millones de dólares, acción que le dio un respiro al gobierno para que negociara, un ominoso 13 de agosto, una moratoria con sus acreedores al pago del principal de su deuda (moratoria que después se extendería a un año), la cual hacía recordar a no pocos el "jueves negro" de 1929.[23]

El auxilio del FMI, por su parte, consistió en un crédito de facilidad

ampliada, en principio por 4 100 millones de dólares girables en los siguientes tres años. El Fondo allanó el camino para que la banca privada internacional concediera un préstamo extra de 5 mil millones de dólares a México. El préstamo era a seis años, con un margen de 2.25 sobre la libor, más una comisión frontal del 1.25% y una comisión de 0.5% para comprometer fondos. El primer giro fue de 1 700 millones en forma simultánea con el primer giro del préstamo de "facilidad ampliada" del FMI, y tres cuotas de 1 100 millones, que acompañarían los otros giros del Fondo.

La crisis y la "política del avestruz" (como la calificó una fuente internacional) habían llegado al máximo de sus posibilidades, acelerando la virtual paralización del proceso de acumulación de capital y arrojando a millares de trabajadores hacia el paro; además había colocado al Estado contra la pared, dejándolo sin recursos para pagar un mes de importaciones, y menos para satisfacer la amortización de la deuda externa.

3. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS MEDIDAS DRÁSTICAS: LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA

La intensa fuga de capitales (véase Cuadro 5.1) tomó proporciones gigantescas a lo largo de todo 1982; erosionó el sistema del crédito en cuyo centro se sitúan los bancos. Primeramente cabe señalar que se resentía el efecto de lo que hemos llamado "volatilización" de los depósitos, proceso que empezó a cobrar fuerza desde fines de 1980, como parte de los efectos de la "petrolización". En efecto, tal como lo demuestra la Gráfica 5.1, se

Cuadro 5.1

FUGA DE CAPITALES EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES
1980-1982

(Miles de millones de dólares)

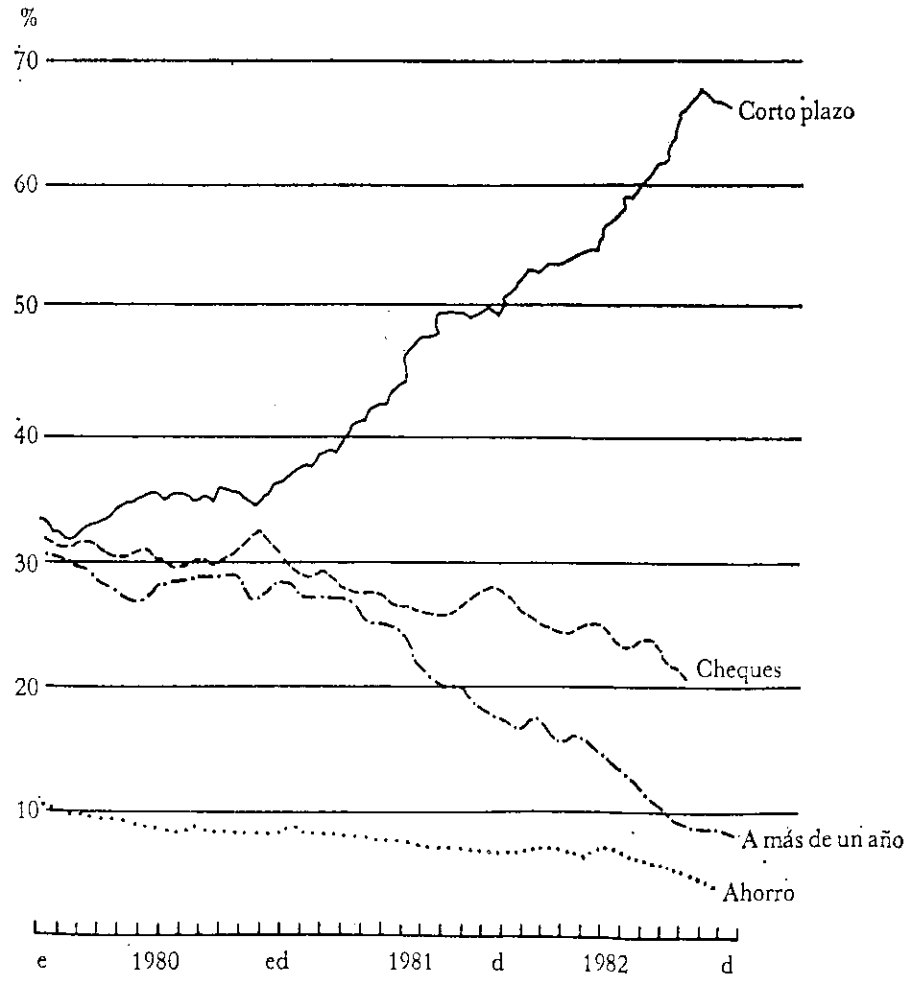
México	28.0
Argentina	12.3
Venezuela	17.8
Indonesia	8.0
Egipto	5.5
Filipinas	5.7
Nigeria	7.0

FUENTE: *Business Week* (3 de octubre de 1983), según estimaciones de esa misma publicación.

Gráfica 5.1

ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN DE MONEDA NACIONAL

(Participación en el saldo de la captación)



FUENTE: Banco de México, *Indicadores económicos oportunos*, tomado de BANAMEX, *Examen de la situación económica de México*, abril de 1983, p. 83.

produjo un brusco fortalecimiento de los depósitos a corto plazo, con respecto a los de largo plazo. Los primeros, que representaban aproximadamente el 35% de la captación a fines de 1980, se dispararon hasta llegar a constituir, a fines de 1982, casi el 70% del total de la captación de la banca en moneda nacional. En cambio, los depósitos a más de un año se derrumbaron a menos del 10%. Esta alteración agravaba la vulnerabilidad de los bancos; los forzaba a buscar una adaptación de sus carteras de inversión y a disminuir el peso de aquellas de más larga maduración (como acciones industriales, préstamos a empresas, etcétera), para hacer frente a la disminución del promedio de duración de los depósitos del público.

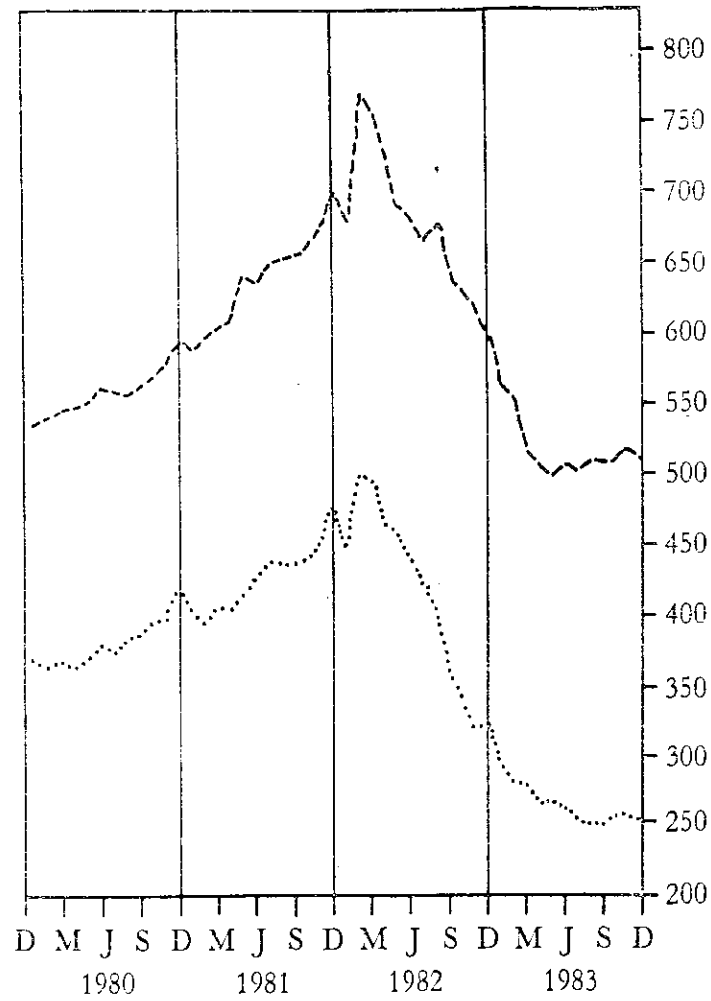
En el seno de la tendencia que se imponía lentamente, se desenvolvió otra: el retiro acelerado de fondos de los mismos bancos. Según los datos de la Gráfica 5.2, el monto de la captación total real se derrumbó desde el primer trimestre de 1982, como producto de la ola de retiros del público y el menor ritmo de los nuevos depósitos. Se trata de una manifestación universal de la crisis financiera en cualquier país capitalista que haya desarrollado los instrumentos del crédito y sea, por ende, propenso a los efectos de la sobrexpansión del mismo. Siendo normal esto, lo que llama la atención es el hecho de que el negocio bancario se asienta sobre la idea de que la masa del público no va a retirar de modo generalizado sus fondos y que nuevos depósitos van a compensar las salidas, de tal manera que siempre existirá una masa relativamente estable o aun creciente, que podrá ser orientada hacia actividades de valorización de largo plazo. Sin embargo, como lo demostró, en mayo de 1984 la quiebra del Continental Illinois de los Estados Unidos, determinados factores (que pueden darse por descontados en el clima de la crisis o en sus secuelas) pueden detonar una situación de pánico y generar una ola de retiros, poniendo en peligro a todo el sistema bancario de un país.

Este fenómeno no era nuevo en México; estuvo presente, como hemos visto, en la crisis de 1976, cuando el Estado tuvo que aportar una línea de crédito de 12 mil millones de dólares, para evitar un colapso del sistema bancario nacional. Sin embargo, el grado de radicalidad de los acontecimientos de fines de 1982 era cualitativamente distinto, por dos factores principales: por una parte, la gravedad de la crisis y, por lo tanto, de los factores que inducían a la especulación y la fuga de capitales. Por otra parte, la vulnerabilidad de la banca coincidía con la inminente bancarrota de las finanzas públicas, por lo que la situación impulsaba la antagonización de las relaciones entre el Estado y los bancos. Desde ya, para poder seguir pagando el servicio de la deuda externa y las importaciones más apremiantes, el poder público había tenido que echar mano de los depósitos bancarios en dólares y los pagaba con pesos a un tipo de cambio determinado unilateralmente (los mexdólares), asestando de este modo un rudo golpe tanto a los inversionistas como a la propia banca, que vio mermar aún más sus recursos. Se asistía a una curiosa escena: el Estado, cuyo papel histórico es la salvaguarda de los intereses fundamentales del capital.

Gráfica 5.2

SALDOS REALES DE CAPTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL, 1980-1983

(Miles de millones de pesos)



------ Captación total

····· Financiamiento al sector privado no bancario

FUENTE: Subdirección de Análisis Financiero Macroeconómico, Dirección General de Política Hacendaria, con datos del Banco de México *Indicadores oportunos*.

se había convertido por su propia crisis fiscal en un depredador forzado (especialmente por la irracionalidad de su propia política), cerrando la vía a un rescate bancario de tipo similar al de 1976.

El profundo deterioro al que había llegado la situación de los bancos y la agudeza de su confrontación con el Estado se ponen de manifiesto en la decisión de los banqueros internacionales de negarse, desde el mes de agosto, a depositar dinero en los bancos mexicanos,[24] así como el temor a prestarles a causa, según señalaba un vocero del Bank of America, de la incertidumbre en torno a la voluntad del gobierno mexicano de respaldar o no los adeudos de aquéllos con el exterior. Estas circunstancias daban aura de hecho inminente al peligro de quiebra sobre él.

La crisis financiera tenía otras implicaciones que deben considerarse en el momento de interpretar el exacto sentido de la nacionalización bancaria. Aun antes de la devaluación de febrero, la especulación se había convertido en un proceso generalizado; como es obvio suponerlo, los bancos, cuyo lugar estratégico en el manejo del crédito les brindaba medios excepcionales, la ejercían en forma especialmente lucrativa. Se recordará que en 1982 el 50% de las ganancias de los bancos comerciales provino de la especulación con oro y divisas, lo cual planteaba graves problemas para la estabilidad financiera del capitalismo mexicano. Evidentemente, los bancos estaban lejos de ser los únicos o siquiera los más asiduos agentes de la especulación. En realidad ellos eran parte de una cadena que incluía a grandes funcionarios públicos, industriales, comerciantes; pero había un hecho incuestionable: la actividad especulativa ejercida por los bancos, en las condiciones existentes de fractura del proceso de acumulación de capital y de pánico financiero, ponía en peligro la estabilidad de todo el sistema del crédito y podía llevar a una ruptura de la circulación capitalista. Había un riesgo adicional: los esfuerzos del gobierno por recuperar el control de la moneda parecían infructuosos al principio. La gravedad de la situación no permitía descartar del todo un desenlace hacia una crisis política, que eventualmente condujese a un golpe de Estado. Asimismo, las necesidades de racionalización del exiguo presupuesto de divisas que aún tenía a su disposición el Banco de México, planteaban mayores demandas de control o supervisión de la banca.

De esta manera puede decirse que existían premisas suficientes para la adopción de reformas radicales a nivel de la circulación del capital en México. Un amplio conjunto de países capitalistas había pasado, parcialmente, por situaciones parecidas desde el estallido de la crisis mundial de 1973, con lo que las operaciones de rescate bancario, nacionalizaciones y otras medidas análogas se convirtieron en expedientes más o menos comunes a causa de la peligrosa expansión del crédito.[25] Por ejemplo, el crack del Herstadt Bank, de Colonia, puso en marcha un proceso estricto de control del crédito a nivel mundial, que actuó, paradójicamente, como elemento precipitador de la crisis de 1973.[26] También en Turquía, la crisis económica de mediados de los años setenta había puesto al sistema bancario al borde de la quiebra, obligando al Estado a efectuar un rescate financiero. En Estados Unidos, el rescate del Continental Illinois National Bank and Trust Co.,[27] en 1984, implicó cantidades mayores que las que hubo que reunir, en 1982, para impedir la bancarrota de México y Brasil. Otro ejemplo lo proporciona la situación bancario-financiera en Chile, país en el cual la junta militar ha otorgado un subsidio a la banca privada de aproximadamente 4 000 millones de dólares, que será pagadera en treinta años, con un plazo adicional de diez de gracia y sin intereses.[28]

La decisión de nacionalizar la banca en México y superar por esa vía las contradicciones de la circulación, había sido preparada por varios factores, tal como se desprende del análisis precedente. Primeramente, el Estado mexicano había perdido toda posibilidad de efectuar un rescate a la manera de 1976 a causa de sus propios conflictos financieros; es más, su propia carencia de recursos ya lo había empujado a expropiar los depósitos en dólares de la banca. En segundo lugar, la suspensión por la banca internacional de las operaciones con la banca mexicana, implicaba la exigencia de un respaldo estatal a la vulnerada situación de la banca nacional, que técnicamente sólo podía su estatización (fuera provisional o definitiva). En tercer lugar, un simple rescate financiero no daría solución oportuna a las necesidades de control directo sobre la operaciones bancarias (principalmente aquéllas relacionadas con el exterior) que exigía rápido agotamiento de las divisas. Pero más importante que todo era el hecho de que la nacionalización de la banca aparecería, políticamente, como un recurso de emergencia del régimen lopezportillista, que le brindaría una nueva base de legitimidad y consenso al Estado en el momento más álgido de la crisis financiera; proporcionaría además, supuestamente, una cobertura a la aplicación de más drásticos controles sobre los salarios.[29]

En este cuadro, la nacionalización de la banca aparecía como un ajuste de cuentas con los supuestos causantes de la "descapitalización del país" y, en este sentido, como una acción legítima y revolucionaria del Estado. La designación del capital bancario como el "chivo expiatorio" en esta puesta en escena fue consumado por el discurso presidencial del 1º de septiembre; más allá de los previsibles móviles de oportunidad, se trataba también de un fenómeno de dimensión histórica. Su antecedente directo lo marcaba la confrontación del Estado con la banca por la apropiación del crédito (vía encaje legal elevado) durante los años de expansionismo inflacionario de Echeverría. Veremos más adelante, en el Capítulo VI (véase principalmente nota página 14), que el régimen de De la Madrid comparte con el de López Portillo la visión de que la banca, en especial el sistema de los grandes bancos, no había cumplido su papel histórico en el proceso de acumulación de capital, principalmente porque había tendido a generar situaciones de monopolio, que habían perjudicado al resto de los capitalistas. Por lo tanto la nacionalización habría sido, en el fondo, una acción tendiente a combatir los problemas creados por el monopolio bancario, una vez que la crisis financiera los situó a un nivel de gran peligrosidad. Esta interpreta-

ción quedará corroborada en parte cuando estudiemos el programa financiero del gobierno de De la Madrid, en el siguiente capítulo.

En síntesis, la nacionalización de la banca entendida como parte integrante del proceso de reorganización del capitalismo mexicano ante la crisis (y no simplemente como un hecho consumado al calor de un virtual crack del sistema bancario) tenía como función principal racionalizar el manejo de las tenencias de divisas e instaurar un control de cambios. El cariz populista con el que se asumió la nacionalización y su subordinación a objetivos políticos en el momento de recrudecimiento de la crisis, determinaron que el periodo septiembre-noviembre de 1982 (en el que se hizo un intento postrero de aplicar los principios de la Escuela de Cambridge, en materia de tasas de interés), pueda ser considerado como un breve interregno, ya que a partir de diciembre de 1982, la banca nacionalizada empezó a ser conducida con otros criterios que analizaremos más adelante.

La política de abaratamiento del crédito de septiembre-noviembre era inviable en las condiciones de la crisis, ya que el abatimiento de las tasas de interés agudizó el derrumbe de la captación bancaria con las consecuencias obvias sobre la situación financiera del país. Sin embargo, no existe registro estadístico sobre esta ulterior declinación de la captación bancaria, ya que el Banco de México contabilizó los fondos captados en Certificados de Tesorería (CETES) y a los mexdólares como parte de la nueva captación, en esos dos meses.

4. EL PERIODO FEBRERO-NOVIEMBRE VISTO EN SU CONJUNTO

Entre febrero y agosto se abrió un nuevo ciclo en el desenvolvimiento de la crisis económica del país. Este ciclo determinó el agotamiento de las posibilidades de crédito del Estado y una merma de su ya deteriorada capacidad de gestión económica. Desde ese momento, y seguramente por un largo periodo, los préstamos extranjeros se hallarán sujetos a estrictas medidas de control internacional. En ese lapso de siete meses, la principal preocupación de la política del Estado apuntó a garantizar la afluencia de fondos externos; para ello recurrió, mientras le fue posible, a todos los recursos a su alcance: aceptó el incremento exorbitante de los márgenes y de las comisiones impuestas por la banca internacional y volcó el grueso del nuevo endeudamiento hacia obligaciones de corto plazo; recurrió a instrumentos marginales de captación de recursos (créditos de exportación, aceptaciones bancarias...). Esta desesperada búsqueda de fondos se hallaba vinculada a dos objetivos primordiales: el servicio de la deuda acumulada (que implicaba una erogación promedio de mil millones de dólares mensuales en 1982) y la libre convertibilidad del peso al dólar, que el Estado procuraba preservar en virtud de que era un medio indispensable para la remisión de plusvalía al exterior (pieza clave de su práctica comercial en los últimos cuarenta años, y contraparte necesaria de su estrategia de endeudamiento externo). Para que dicha política no funcionase en el vacío el Estado intentó canalizar subsidios hacia la acumulación de capital y procuró asumir parte de las pérdidas empresariales con el propósito de evitar quiebras en cadena. Sin embargo, no faltaban razones para que esta política se viese predestinada al fracaso, en particular por el profundo deterioro de la economía mexicana, mal entendido en un principio por los funcionarios públicos. El aludido fracaso se imponía por el carácter estructural de la crisis y sus profundas raíces, que penetraban los más diversos campos de la valorización del capital. La aplicación de esta política permitió ganar tiempo a costa de desatar contradicciones más graves tales como la nacionalización de la banca.

Aparte de lo anterior, existía un conjunto específico de razones que predisponían al fracaso de esta política, razones que están conectadas con la naturaleza y las pautas populistas del Estado mexicano, dentro del cual el ejercicio del poder público había sido inseparable de la apropiación privada de riqueza en gran escala, por medio de la corrupción. Todo indica que la corrupción y la fuga de fondos asociados a ella adquirieron su máxima intensidad en el periodo que analizamos, a tal grado que *The Economist*, vocero de la burguesía liberal inglesa, calificaba la situación como una pesadilla ("unas docenas de personas del gobierno de López Portillo tomaron millones de dólares para depositarlos en Miami").[30] La peligrosidad de la corrupción y su condición de obstáculo a todo intento de controlar la situación en esos meses radicaba en su antagonismo con cualquier medida de ajuste cambiario: de acuerdo con los datos disponibles, la fuga de capitales y la especulación se intensificaban cuando la devaluación era un hecho más o menos inminente, de tal forma que precipitaban y exacerbaban éstas al drenar las reservas en divisas o en oro. Por ejemplo, al comentar la devaluación del 17 de febrero de 1982, el entonces presidente López Portillo declaró que desde enero, por cada peso en circulación, el equivalente a cincuenta centavos se convertía en dólares y que, en esas condiciones, la devaluación, tal como se dio, excedió con mucho lo que se había previsto en un principio. A su vez, poco antes de la devaluación de agosto de 1982, el fenómeno de la fuga de capitales se agudizó, efectuándose incluso en pesos mexicanos, que salían para depositarse en los bancos del sur de los Estados Unidos.[31] Esto significaba que un amplio núcleo de personas conocía con suficiente antelación el plan de cambiar la paridad del peso respecto al dólar y lo utilizaba como un medio para acrecentar su riqueza. En último análisis esto significaba precisamente que en el seno de las instancias del Estado mexicano no existían los requisitos de confidencialidad que exige la moderna maquinaria del poder burgués y que ésta propendía a ser ampliamente utilizada como instrumento de provecho individual. Está por de más insistir en los efectos profundamente perturbadores de las "fugas de información" para el propio sistema capitalista, para la credibilidad política del régimen y para los intentos inmediatos de estabilización cambiario-financiera.